



Ciencia y política en la arqueología chilena: el caso de Fondecyt

Science and politics in Chilean archaeology: the Fondecyt case

Diego Salazar¹, Rodrigo Alvar¹, Rolando González², Daniel Hernández¹, Horacio Ramírez¹, Felipe Vega²,
Sebastián Yrarrázaval²

Resumen

Pese a los últimos eventos de la contingencia y el debate público que han situado el interés académico en la relación entre ciencia y política en Chile, la arqueología se ha mantenido relativamente ajena a estas discusiones. En el presente trabajo buscamos revertir esta lejanía, proponiendo una reflexión en torno a la principal institución generadora de políticas científicas e investigaciones en el país (Conicyt y el Programa Fondecyt), así como a las condiciones políticas a las que responde y que reproduce, en especial en lo referente a la arqueología. Para ello, identificamos las dimensiones políticas que operan en dicho programa con el objeto de incentivar el debate dentro de la comunidad arqueológica y generar discusiones acerca de posibles propuestas para pensar la política científica, el rol de las ciencias sociales y la promoción de un sentido social de la arqueología en Chile.

Palabras clave: ciencia, Fondecyt, política científica, sociopolítica de la arqueología, Chile.

Abstract

Despite recent events in the public debate and the media regarding the relationship between science and politics in Chile, the archaeological community has shown limited interest in these discussions. In this paper, we seek to reverse this situation by reflecting on the main scientific policy and investigation promoter institution in the country (Conicyt and the Fondecyt Programme). We will analyse the political conditions that guide and are reproduced by the programme, especially in relation to archaeology. In order to achieve this, we attempt to identify the political dimensions operating within the program. We hope hereby to promote the debate within the archaeological community and to discuss some proposals to think scientific policies, the role of the social sciences and the promotion of a social orientation to Chilean archaeology.

Key words: science, Fondecyt, scientific policies, sociopolitics of archaeology, Chile.

¹ Departamento de Antropología, Universidad de Chile. Ignacio Carrera Pinto 1045, Santiago, Chile.
dsalazar@uchile.cl, rodrigo.alvar@ug.uchile.cl, daniel.hernandez@ug.uchile.cl, horacio.ramirez@ug.uchile.cl

² Programa de Magíster en Arqueología, Universidad de Chile. Ignacio Carrera Pinto 1045, Santiago, Chile.
rolando.gonzalez@ug.uchile.cl, felipe.vega@ug.uchile.cl, sebastian.yrarrazaval@ug.uchile.cl



INTRODUCCIÓN

Hace casi 10 años, el arqueólogo norteamericano Randall McGuire escribía que “luego de dos décadas de debate en torno a esta temática, nos damos cuenta que la arqueología es a la vez ciencia y política. Por lo tanto, la pregunta verdaderamente productiva no es ¿cómo hacer de la arqueología una u otra?, sino, por el contrario, lo que necesitamos pensar es cómo podemos vincular ciencia y política en nuestra práctica arqueológica” (McGuire 2008: 36; la traducción es nuestra). Si bien esta afirmación hoy puede parecer un sentido común, la discusión de la dimensión política de la arqueología es un fenómeno más bien nuevo dentro de la historia disciplinaria -quizás la etapa más reciente de su proceso de madurez y “autoconsciencia crítica” (Clarke 1973; véase también Hamilakis 2007). La Arqueología Social Latinoamericana fue pionera a nivel mundial en plantear estas discusiones de forma sistemática (p.e. Lorenzo *et al.* 1976; prólogo de Lumbreras 1981; Montané 1971, 1980). En forma posterior e independiente, desde la segunda década de 1980 la relación entre arqueología y política fue abordada por las arqueologías postprocesuales, posmodernas, críticas y poscoloniales, siendo la literatura demasiado copiosa como para abordarla o sintetizarla en el marco de este trabajo.

Pese a estos notables aportes en términos de “reflexividad” (Hamilakis 2007) o de la “sociopolítica” (Gero 1985) de la arqueología, llama la atención la escasez de trabajos sistemáticos que aborden la relación entre ciencia y política en el marco de la institucionalidad científica nacional e internacional. Las políticas e instituciones científicas son importantes, pues constituyen la estructura a partir de la cual se desarrollan las prácticas sociales de las comunidades académicas. Estas políticas e instituciones juegan un rol central en la determinación y distribución del capital científico y económico dentro de las comunidades académicas, así como en la reproducción de sus relaciones de poder internas y las que se establecen entre la comunidad académica con respecto a otros grupos de interés en la sociedad mayor. No es de extrañar, entonces, que en diversos trabajos las políticas e instituciones nacionales que guían las arqueologías locales hayan sido objeto de análisis históricos (p.e. trabajos en Ucko 1995 y Lozny 2011 a nivel mundial; para el caso chileno véase Ayala 2007 y 2015, Orellana 1996 y Troncoso *et al.* 2008; para otros casos a nivel latinoamericano puede verse también Angelo 2005, Gnecco 1995, Politis y Pérez Gollán 2004, entre varios otros). No obstante, la discusión específica sobre la relación entre ciencia y política en la arqueología de investigación rara vez es tratada con profundidad en dichos estudios.

En contraste con dicho panorama, la institucionalidad científica chilena ha sido objeto creciente de discusión y crítica pública a partir de diversos pronunciamientos en torno a su principal organismo de financiamiento: el Programa FONDECYT de CONICYT. El mundo académico a través de investigadore/as individuales o de colectividades que se han conformado con este propósito, ha ido asumiendo progresivamente una postura política más explícita y problematizadora, expresada a través de cartas abiertas, columnas de opinión, manifestaciones, reuniones con parlamentarios, artículos y apariciones en medios de comunicación. Fenómeno que, en los medios de prensa, ha sido ocasionalmente denominado la “revolución de las batas blancas”.

Es interesante considerar que este proceso parece darse simultáneamente también en otros países latinoamericanos: “El debate público ya muestra que hay cantidades crecientes de científicos que dejan sus laboratorios y oficinas para participar en debates públicos acerca del futuro de la ciencia y sobre las consecuencias sociales del desarrollo científico. Al mismo tiempo, públicos cada vez más variados en las sociedades occidentales y no occidentales discuten los papeles sociales de la ciencia formal y de otras



formas de conocimiento en sus futuros deseados” (Vessuri 2013: 226). ¿Por qué la arqueología se mantiene aún alejada de estos debates?

Es indudable que, al menos en Chile, la participación de arqueólogo/as en esta “revolución” ha sido muy baja, aun cuando ciertos colegas han participado en algunas manifestaciones, reuniones institucionales o en la redacción y/o firma de algunas de las cartas abiertas que se han dirigido a las autoridades científicas del país. Pese a estos aportes, creemos que existe aún una insuficiente reflexión acerca de cómo integrar ciencia y política en el ejercicio de la arqueología académica chilena, tal como proponía McGuire (2008) hace diez años.

El propósito de este trabajo es justamente contribuir a este debate. Para ello, incursionaremos en la relación entre ciencia y política en el principal órgano de financiamiento de la ciencia en Chile, el programa FONDECYT de CONICYT, de modo de abrir una discusión crítica acerca de esta relación y de los efectos de ella en la arqueología académica actual. Por último, aspiramos a proponer algunas ideas generales para pensar la política científica en Chile, el rol de las ciencias sociales en general y de la arqueología en particular, y de ciertas transformaciones institucionales que se perciben como necesarias para cumplir adecuadamente dicho rol.

ANTECEDENTES: CIENCIA, POLÍTICA, FONDECYT Y ARQUEOLOGÍA CHILENA

A partir del año 2007, y en conjunto con las primeras movilizaciones de la comunidad científica chilena (MedUchile 2007), se han incrementado notablemente los espacios de discusión y de participación en torno a la política científica nacional, en la medida en que se han inaugurado debates importantes para comprender críticamente el funcionamiento de las disciplinas académicas financiadas por el Estado. En este sentido, la coyuntura reciente ha ido forzando al mundo académico a reflexionar más explícitamente en torno a la relación entre ciencia y política. Instancias como el anuncio durante el gobierno de Sebastián Piñera de que Conicyt pasaría del Ministerio de Educación al Ministerio de Economía, la propuesta de creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología o el nombramiento en menos de cuatro años de cuatro presidentes de Conicyt (Opazo 2014; Espinoza 2015; Fajardo 2016), proporcionaron ingredientes necesarios para una creciente enunciación por parte del mundo académico de visiones críticas sobre la política científica nacional.

Otra importante y cada vez más recurrente arista de la discusión académica ha girado en torno a la escasa inversión del Estado en ciencia (actualmente 0,4% del PIB). Grupos tales como “Más Ciencia para Chile” (a partir de 2012 constituido jurídicamente como “Fundación Más Ciencia”), han demandado un alza sustantiva en los recursos económicos asignados a la ciencia, la tecnología y la innovación de forma tal que esta pueda desarrollarse y divulgarse correctamente (Más Ciencia Para Chile 2016). Otro tema controversial ha sido el lugar institucional de la ciencia dentro del Estado (Zamorano 2012; Vila 2012; Más Ciencia Para Chile 2012a). El Consejo de Sociedades Científicas de Chile –organización que agrupa a 30 sociedades científicas afiliadas-, ha sido uno de los principales portavoces institucionales en este debate, el cual ha conducido en los últimos meses a la promulgación del Ministerio de Ciencia por parte de la Presidencia de la República de Chile (Espinoza 2015; CONICYT 2016).

Mientras tanto, otras agrupaciones como “Ciencia Con Contrato” y la “Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado” han buscado crear consciencia acerca de las precarias condiciones laborales en la que se desenvuelven lo/as científico/as nacionales. Se ha defendido la idea de que la precariedad



sería resultado de una política científica neoliberal que entiende al investigador/a como un proveedor de servicios específicos, lo cual implicaría bajos sueldos, nula protección social e inexistencia de seguros de trabajo (Ciencia con Contrato 2015). En efecto, la política nacional chilena privilegia financiar la actividad científica a través del subsidio a proyectos de investigación y no a las carreras científicas de los investigadores, a diferencia de otros modelos de política científica como el CNRS francés, el CSIC español o el CONICET argentino, por nombrar algunos ejemplos conocidos.

Pero el antecedente principal que nos interesa relevar en este trabajo, el cual no ha estado exento de polémica, lo constituye el estudio “¿Tienen los concursos de FONDECYT un trasfondo político?”, de los sociólogos Alberto Mayol y Javiera Araya, hecho público a inicios de 2016. El estudio pretendió indagar en los posibles efectos que tiene la política nacional sobre la adjudicación de proyectos FONDECYT, una idea según los autores planteada previa e informalmente por la comunidad científica nacional. El principal resultado es una supuesta relación significativa entre la tendencia política y valórica de las universidades que actuaron como institución patrocinante para los proyectos FONDECYT aprobados entre 2007 y 2015 y los ciclos políticos que tuvieron lugar en el mismo período en Chile, sugiriendo por lo tanto que los gobiernos de turno incidieron de alguna manera en los resultados de los concursos de FONDECYT, favoreciendo a aquellas instituciones más afines a sus posiciones políticas y valóricas. Las respuestas de la comunidad académica no se hicieron esperar (véase por ejemplo, Casals *et al.* 2016; Dilla 2016; Fajardo 2016; Maillet 2016; Segovia 2016).

Los argumentos en contra de las conclusiones del estudio se articularon en torno a tres ideas fundamentales: 1) que ubicar el foco en las instituciones por sobre los individuos constituiría un error, dado que los proyectos son adjudicados a investigadoras e investigadores individuales y no a instituciones; 2) que la agrupación de dichas instituciones en torno a ‘clivajes’ no solo sería discutible, sino que además invisibilizaría la agencia de las y los investigadores que se adjudican proyectos por fuera de los lineamientos que dispone la institución en que trabajan; y 3) que interpretar los datos en función de tres flujos políticos gruesos sería reduccionista (véase por ejemplo, Casals *et al.* 2016; Dilla 2016; Fajardo 2016; Maillet 2016; Segovia 2016).

Si bien estas respuestas y argumentos adicionales que veremos más adelante demuestran que las conclusiones del estudio de Mayol y Araya son del todo rebatibles, debemos destacar su mérito en términos de haber puesto en la palestra una problemática que no había sido discutida abierta y sistemáticamente por el mundo académico. En ese contexto, llama la atención que algunas de las críticas al estudio –muchas veces con ribetes personales– parezcan defender la idea de que no existe relación entre ciencia y política en FONDECYT. Cuando menos, no logran clarificar en qué medida el contexto político influye sobre el programa FONDECYT, dejando por lo tanto sin resolver el importante problema levantado por Mayol y Araya (2016).

Los aportes desde la arqueología a estos debates han sido, cuando mucho, discretos (p.e. participación de algunos organismos como la Sociedad Chilena de Arqueología en la demanda del Consejo de Sociedades Científicas de Chile acerca de la autonomía ministerial de la ciencia; o participación de alguno/as colegas en manifestaciones o en la redacción y/o firma de cartas abiertas que se han dirigido a las autoridades científicas del país). Lo anterior significa que, si bien la investigación en la arqueología chilena es financiada principalmente por el Estado a través del programa FONDECYT desde inicios de la década de 1980, no se ha reflexionado en forma explícita acerca de la dimensión política de tal práctica académica o de sus efectos en la manera en la que se hace arqueología y se construyen discursos legítimos



sobre el pasado en Chile. En este sentido, aun cuando en años recientes diversos trabajos publicados por arqueólogos/os chileno/as han promovido una reflexión más crítica acerca de nuestra disciplina, discutiendo explícitamente su dimensión política (Adán *et al.* 2001; Ayala 2003, 2007, 2014, 2015; Carrasco 2006; Carrión *et al.* 2015; Jiménez *et al.* 2000; Jofré 2007; Leighton 2014; Romero 2003; Salazar *et al.* 2012; Sepúlveda 2012; Troncoso *et al.* 2008, entre otros), el contexto político de la práctica arqueológica realizada al alero del programa FONDECYT prácticamente no ha sido puesto en discusión. Las únicas excepciones a lo anterior son menciones más bien tangenciales que señalan algunas implicancias de la “idea de ciencia positivista” que promueve FONDECYT (Ayala 2003; Salazar y Jiménez 1999; Salazar *et al.* 2012; Uribe y Adán 2003; Vilches *et al.* 2015); la falta de articulación de FONDECYT con otras instituciones del Estado, en particular CONADI (Uribe y Adán 2003); la falta de financiamiento (Carrasco 2006); y la relación de la arqueología realizada dentro de FONDECYT con la lógica moderna y la historia reciente de Chile (Troncoso *et al.* 2008; Salazar *et al.* 2012). Pero ninguno de estos temas es desarrollado en profundidad en estos trabajos. Más aún, casi en el mismo año en que la arqueología chilena se integraba por primera vez a los proyectos FONDECYT, se celebraron en Santiago las Primeras Jornadas de Arqueología y Ciencia (1983), ocasión en la que se intentó realizar una discusión más profunda acerca de la arqueología chilena de ese momento. No obstante, en dicha reunión no hubo mayor reflexión sobre las implicancias de la integración de la arqueología chilena a FONDECYT y las discusiones sobre política científica se centraron más bien en la necesidad de aumentar los fondos públicos destinados a investigación arqueológica o en señalar las limitaciones que implica que quienes administran los fondos del Estado para la investigación no entiendan los requerimientos de un proyecto arqueológico.

La insuficiente discusión sobre ciencia (o FONDECYT) y política dentro de la arqueología chilena se ve también reflejada en la ausencia de publicaciones sobre este tema en uno de los medios de difusión más importantes dentro de la historia reciente de la disciplina en nuestro país: el Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología. Esta revista ha sido testigo de una gran cantidad de anuncios, comentarios, columnas y publicaciones acerca de las dimensiones políticas de la práctica arqueológica, pero estas han aludido esencialmente a temáticas vinculadas al patrimonio, la relación de la arqueología y sociedad, la difusión y educación arqueológica y, durante los últimos años (principalmente desde los 90's), la relación de la arqueología con las comunidades indígenas (Ayala 1999; Berenguer 1992, 1995; Cáceres 1992; Carrión *et al.* 2015; Cornejo 1993, 2000; Gallardo 1992; Jackson 1999, 2000; Massone 1987; Mena 1992; Rivera 1999; Schiappacasse 1986; Valdés *et al.* 1994, entre otros). Solo en el Boletín del Aniversario 30 de la Sociedad Chilena de Arqueología (1995), las mesas de trabajo que ahí expusieron discutieron ciertos elementos de la relación entre ciencia y política, especialmente la mesa de los años 90's, en donde se discutió acerca de la falta de fondos para investigar, que derivaría en una dependencia en FONDECYT para la inserción de jóvenes a la investigación. Veinte años después, en la reciente reunión de la Sociedad Chilena de Arqueología en Punta de Tralca para celebrar sus 50 años (2015), los colegas Francisco Gallardo y Gloria Cabello abordan más directamente la relación entre ciencia y política en la arqueología chilena al alero de la “Mesa Investigación y Ciencia” (SChA 2015:183-186). Diagnosticando en CONICYT/FONDECYT un “nulo crecimiento de proyectos concursados y ganados en nuestra disciplina en relación con otras” y una “consolidación de investigadores de trayectoria en el FONDECYT Regular y el peso desigual de la productividad” de éstos, lo que “afecta negativamente la competitividad” (SCHA 2015:185), se proponen brevemente cuatro posibles soluciones: “Mayor Inclusión”, “Consolidar nuevos fondos”, que aspira a aumentar el financiamiento de la arqueología; “Productividad”, en la que se propone cuestionar, por la comunidad científica en su totalidad, los indicadores actuales en desmedro de las publicaciones fuera de *Web of Science* o SciELO; y “Flujos de información adecuados”, de manera de poner a disposición de las comunidades locales y la comunidad científica los resultados de las investigaciones, diversificando las vías



de información independientemente de la asignación de productividad descrita (SCHA 2015:185). No obstante, dadas limitaciones de espacio, estas interesantes ideas fueron apenas enunciadas.

Por su parte, durante el último Congreso Nacional de Arqueología Chilena (Concepción 2015), se abordó por primera vez mediante un simposio temático el problema de la arqueología y sus implicancias políticas. Pero nuevamente los temas predominantes en dicho simposio fueron similares a los que han sido discutidos y publicados por nuestro/as colegas a lo largo de las últimas tres décadas en distintos espacios académicos: la arqueología de la represión, la arqueología pública y su relación con procesos de patrimonialización, conflictos ambientales y arqueología indígena.

Sin perjuicio de la evidente importancia de discutir estos temas y de su creciente visibilidad en la comunidad arqueológica chilena, a partir de la revisión de antecedentes que hemos realizado queda en evidencia que la dimensión política de la arqueología financiada por el Estado a través del programa FONDECYT sigue sin ser objeto de un análisis crítico sistemático por parte de la disciplina. De hecho, las discusiones surgidas a partir de la “revolución de las batas blancas” que hemos descrito en las páginas precedentes prácticamente no han sido abordadas o discutidas en los espacios formales de difusión de las y los arqueólogos chilenos.

Para abordar en cierta profundidad el “cómo” de la relación ciencia y política que se articula en FONDECYT y CONICYT y sus efectos sobre la arqueología chilena, a continuación explicamos el funcionamiento burocrático e institucional de CONICYT y el Programa FONDECYT. A partir de dicha información propondremos tres dimensiones principales en las que se expresa la relación entre ciencia y política en la arqueología académica chilena. En la parte final del artículo nos abocaremos a proponer ciertas ideas en relación con las características que podría tomar una política científica de carácter nacional.

CONICYT Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FONDECYT

La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), creada en 1966, es un organismo autónomo asesor de la presidencia de la República de Chile en materias de desarrollo científico y tecnológico. Se encarga de promover la formación de capital humano, fortalecer la base científica y tecnológica del país mediante fondos concursables y divulgar el conocimiento científico. Organizativamente, CONICYT depende actualmente del Ministerio de Educación y se divide en dos estamentos: uno presidencial formado por el presidente, encargado de definir los lineamientos institucionales, y un consejo consultivo responsable del asesoramiento. A lo anterior se le suma una dirección ejecutiva compuesta principalmente por los encargados de los distintos programas de CONICYT y cuya misión es la aplicación de los lineamientos determinados por el estamento presidencial (CONICYT 2013). En términos de financiamiento, el presupuesto asignado a CONICYT ha ido progresivamente en aumento desde su constitución a la fecha. Solo en la última década, el incremento presupuestario es de más de un 300%, pasando de \$90.317.969.000 en 2007 a \$304.338.918.000 en 2016 (DIPRES 2016).

Ahora bien, dentro de los diversos programas de investigación científica que financia CONICYT, el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), se perfila como el principal programa de fortalecimiento y financiamiento de la actividad científica de Chile. Su objetivo principal es el fomento de la investigación científica nacional a través de la entrega de fondos concursables, sin distinciones disciplinarias prioritarias (CONICYT 2000).



El Programa FONDECYT está compuesto por los Consejos Superiores de Ciencia y Tecnología, la Dirección del programa y Grupos de Estudio temáticos. Los Consejos Superiores son el estamento superior en la jerarquía administrativa de FONDECYT, los cuales se dividen en dos grupos. El primero es el Consejo de Ciencia, constituido por siete miembros y el segundo es el Consejo de Desarrollo Tecnológico, conformado por cinco miembros. En el caso del Consejo de Ciencia, seis de los miembros son elegibles en base a su contribución a la escena científica nacional, mientras que el séptimo es escogido por los miembros del Consejo de Desarrollo Tecnológico. En el Consejo de Desarrollo Tecnológico, por su parte, tres de los miembros son elegibles en base a sus méritos académicos, el cuarto es escogido por el Consejo de Ciencia y el quinto es el presidente de CONICYT (Ministerio de Educación Pública 1981).

La función de los Consejos Superiores de Ciencia y Tecnología es establecer programas de investigación, convocar a concursos, seleccionar proyectos, asignar y supervisar los recursos correspondientes a cada programa, asignar y supervisar el trabajo de grupos de estudio y proponer nuevos consejeros (CONICYT 2000).

Los grupos de estudio de FONDECYT, por su parte, se encargan de asesorar a los Consejos Superiores en la selección de los proyectos y evaluar los resultados de aquellos en ejecución. En la actualidad existen trece grupos de estudio en FONDECYT, conformados por miembros destacados de la comunidad académica, los que son propuestos por los propios integrantes de los Grupos antecesores a los Consejos superiores. La arqueología se encuentra inserta en el grupo de estudio de Antropología y Arqueología, el cual tiene competencia en una serie de subáreas de la antropología: la arqueología, la etnohistoria, la antropología social y la antropología física.

FONDECYT posee tres modalidades de concurso para acceder al financiamiento en investigación (CONICYT 2013, 2014): el concurso de postdoctorado (creado en 2012), el concurso de iniciación (creado en 2009 y dirigido a investigadore/as que posean el grado académico de doctor y que estén iniciando su carrera investigativa) y el concurso regular (el más antiguo y el más importante, creado en 1982).

El sistema de evaluación y selección de proyectos FONDECYT, en cualquiera de sus tres modalidades, posee tres etapas: postulación, evaluación curricular del postulante y evaluación de la calidad y viabilidad del proyecto. La evaluación curricular de los concursantes se hace en base a la productividad científica del investigador/a responsable del proyecto en los últimos cinco años, la cual a su vez se mide principalmente en términos de publicaciones indexadas. Los grupos de estudio tienen criterios distintos para la evaluación curricular de los postulantes, en especial en cuanto a la valoración entregada a diferentes tipos de publicaciones. Por ejemplo, en el Grupo de Estudio de Antropología y Arqueología, se utiliza una tabla de puntajes que convierte las clases de publicación según el tipo de indexación de la revista o libro, en puntos de forma estandarizada, siendo los libros publicados en editoriales internacionales y con evaluación de pares los que más otorgan puntaje (20), seguidos por las Revistas indexadas en *Web of Science*, SCOPUS o ERIH (12). Artículos en libros sin evaluación de pares tienen la menor puntuación (2), mientras que las contribuciones en actas de congresos actualmente no reciben puntaje alguno. En este grupo de estudio no se considera el índice de impacto de la revista, lo que sí es considerado en otros grupos.

Es importante destacar que, en la tercera etapa de selección de proyectos, la evaluación del grupo de estudio incide más bien indirectamente. Vale decir, éste no se encarga directamente de la evaluación de los proyectos postulados, al menos en los concursos de iniciación y regular. Por el contrario, para ello



designan a evaluadores externos, quienes pueden ser nacionales o extranjeros, y cuya trayectoria académica en la temática a evaluar esté asegurada por su experiencia y publicaciones.

Una vez evaluados los proyectos por parte de los pares anónimos, estos envían sus evaluaciones al grupo de estudio, el que revisa la evaluación en conjunto sin la presencia de aquellos miembros que guarden alguna relación o conflicto de interés con los postulantes. El rol del grupo de estudio en esta etapa es básicamente garantizar que las evaluaciones no contengan criterios no académicos y que sean consistentes entre los puntajes asignados y los comentarios entregados para justificar dichos puntajes. El grupo de estudio revisa las tres primeras evaluaciones en ser entregadas por parte de los árbitros y discute su validez. Cuando existe cuestionamiento a la integridad de una evaluación, se omite ésta y se considera la cuarta en orden de llegada.

Los miembros del grupo de estudio de antropología y arqueología son designados de acuerdo a las necesidades académicas. Por ejemplo, si en el grupo de estudio no existe personal capacitado para evaluar trabajos sobre temáticas de etnohistoria, se solicitará la incorporación de un nuevo miembro que posea dichas competencias. El proceso de incorporación requiere que el grupo, o más comúnmente el Director del Grupo, proponga a quien estime competente para que el Consejo Superior de Ciencia determine si la persona propuesta posee los requisitos curriculares necesarios para ser incorporada.

La presencia de miembros de distintas instituciones dentro de los grupos de estudio da ciertas garantías respecto de los resultados de la evaluación por pares. Lo anterior puesto que cada evaluador/a propuesto es discutido por el grupo de estudio en función de sus competencias en la materia del proyecto, y sus antecedentes son revisados para que no tenga relación personal, profesional o institucional con los postulantes al proyecto, a lo menos en los últimos años. Las evaluaciones de los pares externos no pueden ser objetadas o cuestionadas por el grupo de estudio, a menos de que éste logre consenso respecto de la incoherencia de la evaluación o la introducción de criterios no académicos en la misma. Por su parte, los miembros del grupo de estudio no mantienen vínculos con los evaluadores externos, pues la labor de estos es coordinada directamente por la administración del programa Fondecyt.

CIENCIA Y POLÍTICA EN FONDECYT: EL CASO DE LA ARQUEOLOGÍA CHILENA

Esta breve revisión del funcionamiento de CONICYT, y del programa FONDECYT en particular, debiera bastar para demostrar que la hipótesis presentada por Mayol y Araya (2016) carece de fundamento. Es muy difícil que los gobiernos de turno logren incidir en los resultados de los proyectos FONDECYT, debido a que quienes tienen la mayor responsabilidad en la evaluación y, por lo tanto, la adjudicación de los proyectos, son los evaluadores externos, los cuales en muchos casos son incluso extranjeros. No hay posibilidad de que los gobiernos intervengan en estas evaluaciones, ni tampoco en la evaluación curricular de las y los investigadores, la cual se realiza de acuerdo con criterios establecidos en las bases de los concursos. Tampoco es aceptable insinuar que los grupos de estudio o el consejo superior de ciencias tergiversan o manipulan las evaluaciones de los evaluadores externos con el objeto de favorecer a instituciones más afines a los gobiernos de turno. Por lo demás, tanto los grupos de estudio como el consejo superior de ciencia están compuestos por académico/as de distintas orientaciones políticas y provienen de instituciones diversas, mientras que sus miembros no se renuevan con los cambios de mando en la Presidencia de la República. Por lo tanto, para que la hipótesis de los autores fuese viable, habría que establecer bajo qué mecanismos y prácticas concretas operaría la toma de decisiones orientada políticamente en el programa.



No obstante, cuestionar la validez de los resultados del estudio de Mayol y Araya (2016) no significa argumentar que no existe relación entre FONDECYT y la política, sino más bien que la relación se da de formas distintas a lo planteado por dicho estudio. Identificar dónde y cómo se vinculan ciencia y política en FONDECYT resulta crucial para una reflexión crítica acerca de este programa y, sobre todo, para sustentar propuestas acerca de cuál podría o debiera ser su funcionamiento.

En este sentido, proponemos que la relación entre ciencia y política en FONDECYT se da en tres dimensiones independientes, aunque ciertamente articuladas: i) Las políticas de Estado que reproduce el Programa FONDECYT; ii) La política científica que explícita o implícitamente promueve el Programa FONDECYT y iii) Las relaciones sociales que se estructuran en torno a este programa al interior de las comunidades científicas y con respecto a otros actores sociales nacionales. Discutiremos a continuación cada una de estas dimensiones.

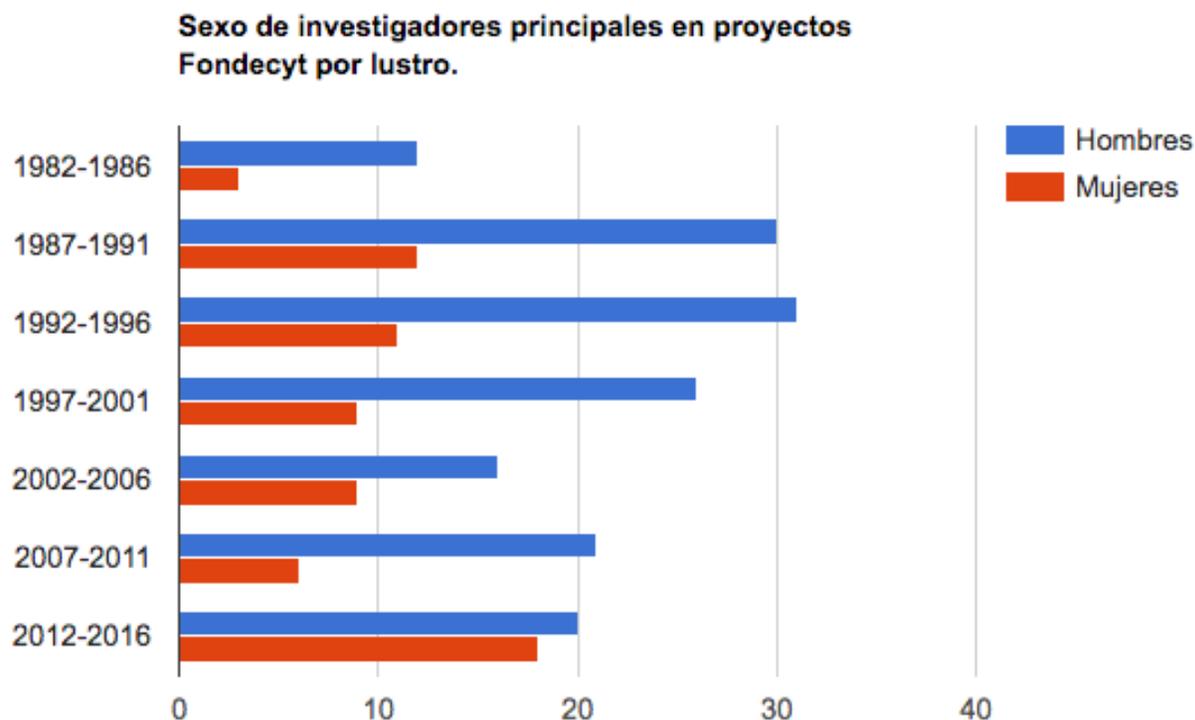
La influencia de la política nacional en FONDECYT

Pese a que la hipótesis de Mayol y Araya (2016) debe ser desechada, el contexto político nacional sí tiene efectos en FONDECYT y los resultados de los proyectos. Dos ejemplos sirven para graficar lo anterior. Por una parte, las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres en términos de acceso a recursos de investigación. Y por la otra, la estructura centralista de la política y economía nacionales. Estos aspectos no son resultado de voluntades políticas conscientes de los diversos actores que componen el programa FONDECYT, sino que más bien son reflejo del hecho de que dicho programa se encuentra instalado dentro de otras instituciones y prácticas sociales que se articulan en términos de estos dos ejes de desigualdad: género y geopolítico.

En términos de las relaciones de género, a nivel del programa FONDECYT como un todo es interesante que no todas las disciplinas muestran la misma evolución de sus resultados. En efecto, con respecto a la distribución por sexo de los investigadores principales de los proyectos FONDECYT adjudicados hasta la fecha exclusivamente en el área de arqueología (excluyendo etnohistoria, antropología física y antropología social), se advierte una diferencia significativa entre los proyectos adjudicados a hombres y mujeres, solo hasta el fin de la primera década del nuevo milenio (Figura 1).



Figura 1. Sexo de los investigadores responsables de proyectos Fondecyt de arqueología por lustro.
Figure 1. Sex of head researchers on archaeological projects funded by Fondecyt per 5 year periods.



Como puede apreciarse en la Figura 1, entre 1982 y 2011, gran parte de los proyectos FONDECYT fueron adjudicados a hombres (aproximadamente el 70%). Desde 2012 en adelante, sin embargo, la adjudicación de proyectos se ha equiparado entre ambos sexos, aun cuando la diferencia en este último lustro aumenta a 8% si se excluyen los proyectos de iniciación y posdoctorado. Lo que no queda claro de estos datos estadísticos, sin embargo, es si la aparente equiparación en proyectos FONDECYT adjudicados a mujeres y hombres es resultado de políticas de género que inciden en los resultados de las evaluaciones de los proyectos o es más bien efecto de la mayor cantidad de mujeres que postulan al concurso. En efecto, de acuerdo a los datos publicados por el Programa FONDECYT para todos sus grupos de estudio y disciplinas, entre 2001 y 2015 los proyectos de investigación liderados por mujeres alcanzaron apenas el 27,3%, aunque existe un cierto aumento desde 2008 a la fecha (CONICYT 2015). De cualquier modo, en ningún caso se produce la equiparación que se observa en arqueología, lo que sugiere que el quiebre al alza en la adjudicación de proyectos de arqueología a mujeres en el último lustro es más bien resultado del mayor número de mujeres que postulan al concurso. Desgraciadamente no contamos con los datos de la cantidad de proyectos postulados a FONDECYT en arqueología y su distribución por sexo como para determinar la posible existencia de variaciones en la tasa de aprobación entre hombres y mujeres en nuestra disciplina. No obstante, a partir de los mismos datos proporcionados por FONDECYT para todos sus programas y disciplinas, entre 2001 y 2015 la tasa de adjudicación de proyectos entre hombres y mujeres muestra diferencias significativas casi todos los años, las cuales pueden alcanzar incluso los 8 puntos (CONICYT 2015). Esto es relevante pues significa que, en términos generales, independiente de la cantidad de proyectos concursados y en especial del hecho de que más mujeres postulan al concurso en los últimos años, los proyectos liderados por hombres son más frecuentemente adjudicados que los



liderados por mujeres. Sería interesante consultar a FONDECYT acerca de la nómina de evaluadores de proyectos de modo de estimar si la distribución desigual por sexo en este punto sea parcialmente responsable de los datos observados y si los aumentos en la tasa de adjudicación de mujeres en algunos años coinciden con la mayor representación de mujeres evaluadoras de proyectos. Queda para futuras investigaciones explorar esta hipótesis.

Respecto al segundo punto, el panorama general del Programa FONDECYT muestra que la distribución de los proyectos adjudicados es totalmente asimétrica entre la Región Metropolitana y el resto de las regiones del país. En efecto, entre el año 2008 y el año 2016, el 61,28% de los proyectos fueron patrocinados por una institución ubicada en Santiago.

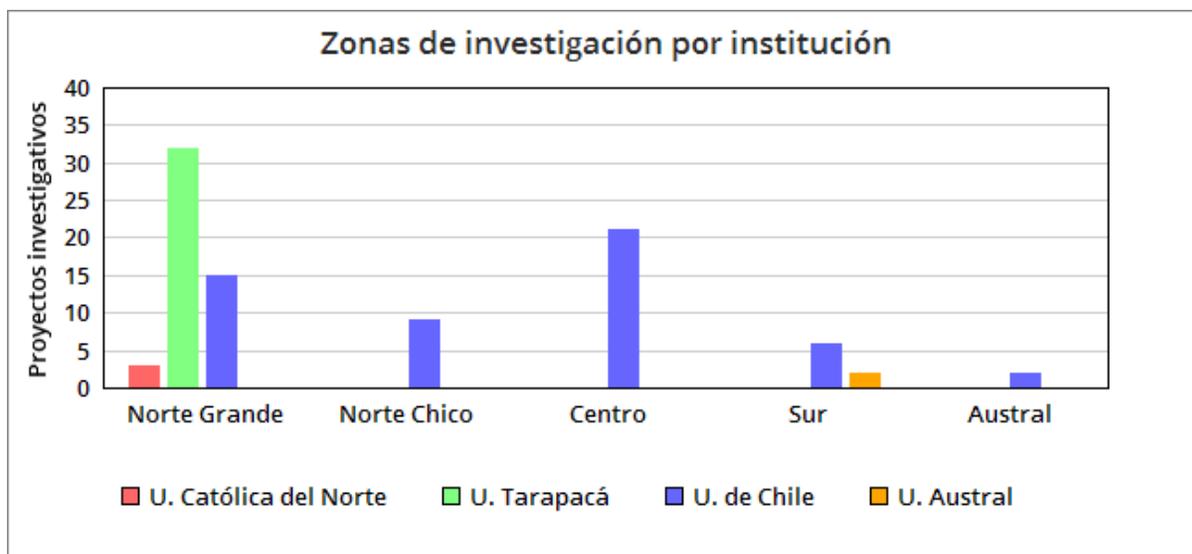
Esta asimetría, que podría calificarse de centralista, puede explicarse por la estructura político-administrativa de Chile. En ese sentido, la mayoría de los proyectos FONDECYT adjudicados se quedan en la Región Metropolitana pues esta posee las universidades más antiguas y mejor equipadas del país (fundamentalmente Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de Santiago, que concentran gran parte de los proyectos) (Parada 1999). Las sucesivas victorias de dichas instituciones en los concursos de FONDECYT, aumentaron aún más su prestigio, financiamiento e infraestructura, generando de esta forma un círculo vicioso: la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile y la Universidad Católica reciben la mayor parte de los fondos porque son las que poseen mayor prestigio e infraestructura, pero al mismo tiempo su prestigio se mantiene y aumenta debido a que sus académicas/os se adjudican la mayor parte de los proyectos.

En cuanto a las instituciones que han patrocinado los distintos proyectos FONDECYT en el área de arqueología, vemos ciertas diferencias en relación con la tendencia general. Por ejemplo, considerando los 226 proyectos que han sido adjudicados a arqueología desde el inicio del programa en 1982, un 56,2% han sido aprobados a instituciones de la Región Metropolitana, por sobre un 43,8% de aprobación para instituciones con funcionamiento fuera de Santiago. De esta forma, la Región Metropolitana, y Santiago en particular, continúa teniendo el protagonismo investigativo, aunque este protagonismo es menor que en el caso de otras disciplinas. Las razones para esta diferencia podemos encontrarlas en el hecho de que, de las tres universidades capitalinas que más proyectos FONDECYT se adjudican, hasta el año 2015 solo la Universidad de Chile concursaba en el área de arqueología. Si consideramos a la Universidad Católica, por ejemplo, esta institución concentra en promedio aproximadamente el 20% de los proyectos FONDECYT adjudicados a nivel nacional, pero hasta el 2015 no patrocinaba proyectos de arqueología. Por lo tanto, la ausencia de dicha institución en el caso de arqueología influye significativamente en la distribución regional de los proyectos FONDECYT adjudicados en nuestra disciplina, caso similar, aunque en menor grado, al de la Universidad de Santiago.

No obstante lo anterior, existe una segunda dimensión, menos evidente que la anterior, en la cual se advierte también esta estructura centralista de la arqueología chilena financiada por FONDECYT. Un sencillo análisis de frecuencias muestra que las únicas instituciones que investigan arqueológicamente en zonas distintas a las de su propia locación particular, son justamente las que se encuentran en la zona central y en particular en la Región Metropolitana (Figura 2).



Figura 2. Proyectos Fondecyt aprobados desde 1982 por zona de investigación
Figure 2. Approved Fondecyt projects since 1982 per research area



En efecto, solo 5 proyectos ejecutados en la zona central de Chile son patrocinados por instituciones que no están ubicadas geográficamente en Santiago, pero en este caso se trata de instituciones de la V Región (Museo Fonk, MHN y CIEM Aconcagua) que investigan preferentemente temas asociados a dicha región. Solo el 31,19% de las investigaciones patrocinadas por instituciones con sede en la zona central de Chile han sido realizadas en la misma zona, mientras que 36,7% de las investigaciones son llevadas a cabo en las regiones septentrionales de Chile (I y II Región, sobre todo), mientras que las instituciones radicadas en dichas regiones desarrollan el 98,18% de sus investigaciones en la misma zona. Incluso en algunas regiones de la zona sur y el norte chico, prácticamente toda la investigación es ejecutada por alguna institución metropolitana. Es posible que el mayor localismo de las instituciones regionales promueva una tendencia hacia un “feudalismo arqueológico”, el cual en parte sea también una respuesta ante las asimetrías geopolíticas de la Región Metropolitana respecto del resto del país en todos los aspectos de la vida nacional.

Cabe señalar que, tal como vimos en relación con las asimetrías de género, FONDECYT no es en sí mismo un programa centralista ni sexista, sino que simplemente está inserto dentro de un conjunto de relaciones sociopolíticas de centralismo y asimetrías de género previas, las que determinan en parte su funcionamiento. El programa Fondecyt está consciente de esta situación y ha implementado ciertas medidas buscando revertir estas asimetrías, tal como se desprende de sus informes de resultados anuales. Por ello, sería esperable una mitigación de los efectos de estas asimetrías en el futuro. A continuación revisaremos las principales políticas científicas explícitas del programa FONDECYT y de CONICYT en general, buscando visibilizar otros aspectos de la compleja relación entre ciencia y política en dicho programa.



FONDECYT y la política científica nacional

FONDECYT es sin duda un generoso programa de apoyo a la investigación científica en arqueología, sobre todo en comparación con otros países latinoamericanos e incluso de algunos países del denominado “primer mundo”. Pero junto con lo anterior, FONDECYT dispone de recursos muy limitados para sueldos de las y los investigadores. Ya hemos visto que diversos colectivos han cuestionado las condiciones laborales dentro de CONICYT y FONDECYT. Pero, además de lo anterior, queremos llamar la atención sobre el hecho de que esta estructura de financiamiento implica que las y los investigadores deben contar con otras fuentes laborales para poder subsistir. Y eso significa, por lo tanto, tener que dedicar la mayor parte de la jornada laboral a las diversas tareas vinculadas con los empleos que tiene cada una/o, generalmente en universidades, museos o los estudios de impacto ambiental en el caso de la arqueología. Las implicancias de lo anterior son disponer de poco tiempo para la lectura y la reflexión. Quizás este aspecto contribuya a la falta de reflexión y producción teórica que predomina en nuestra arqueología, sin perjuicio de que obviamente existen excepciones a lo anterior. Lo cierto es que el primer elemento que caracteriza a la política científica chilena, es que ésta privilegia el financiamiento de investigaciones individuales por medio de la libre competencia entre proyectos de investigación y no la carrera de investigador/as. Un segundo elemento que es necesario esclarecer, mucho más complejo que el anterior, es el para qué se hace ciencia.

La mayoría de los agentes vinculados a la investigación científica en Chile comparten la noción de que la ciencia es importante para el “desarrollo” del país. CONICYT declara, de hecho, que el objetivo principal del fortalecimiento de la ciencia en Chile ha de centrarse en el “progreso” económico, social y cultural nacional (CONICYT 2010, 2013). En ocasiones esta concepción se advierte como tautológica, en la medida de que se asume que el propio incentivo a la investigación científica promovería de por sí un “desarrollo social y cultural” en la población nacional. De hecho, en la mayoría de los casos no queda claro qué entienden exactamente los distintos actores por “desarrollo” y en particular CONICYT cuando habla de “desarrollo económico, social y cultural”. Esto nos parece un aspecto fundamental, pues puede afirmarse que es precisamente esta definición poco clara de “desarrollo” la que produce una política científica nacional poco coherente y de poca relevancia social.

Las definiciones más explícitas que podemos encontrar en torno al rol social de la ciencia provienen del Centro Nacional para la Innovación y la Competencia (CNIC), actualmente Centro Nacional para la Investigación y el Desarrollo (CNID). Para este organismo público-privado, encargado de proponer lineamientos y énfasis presupuestarios a la presidencia para la innovación científica y tecnológica nacional, el desarrollo económico a través de la ciencia vendría principalmente a partir de los aportes científico-tecnológicos que se pueden realizar a la industria y a la economía de mercado en general. Se postula la necesidad de generar una “economía basada en el conocimiento”, en que la ciencia, por medio de su aplicación, produzca información relevante para la producción de bienes, servicios y el mejoramiento de los medios productivos (CNIC 2010; OCDE 2007). De esta manera, se deberían priorizar investigaciones enfocadas en las necesidades del sector empresarial o, en palabras del mismo organismo, en atender las necesidades del mercado o *demand pull* (CNIC 2010). En efecto, a partir de su creación en el año 2005, el CNIC ha promovido estrategias de asignación y priorización de recursos a investigaciones que otorguen ventajas competitivas al sector económico por medio de la innovación científica, instrumentalizando el conocimiento científico con el objeto de aportar a un crecimiento económico enmarcado dentro de las estrategias de desarrollo inspiradas en los lineamientos de la OCDE (CNIC 2014). En Chile, siguiendo estos mismos lineamientos (OCDE 2007) se señala que la capacitación de profesionales



especializados con el grado de doctor, respondería a una necesidad urgente de incorporar científicos al sector privado empresarial (CNIC 2010), visión que es del todo compatible con el uso del concepto de “capital humano”. En suma, se postula que la actividad científica debe generarse desde la esfera privada persiguiendo fines productivos. En este escenario, es sencillo identificar el vacío que merodea el rol que cumplen las ciencias sociales en este modelo de desarrollo, y es igualmente evidente nuestro consecuente silencio como arqueólogo/as en torno a él. Volveremos sobre este punto más adelante.

En el documento titulado “Surfear hacia el Futuro, Chile en el Horizonte 2025”, el CNIC (2013) aborda extensamente el tema de la relación entre ciencia, sociedad y cultura en el país a través del “fenómeno de la innovación”. Es interesante destacar que en este documento se incluye como propuesta dentro de la innovación y de la agenda para el desarrollo, la búsqueda e implementación de “Laboratorios Naturales” poniéndose énfasis en sus ventajas comparativas, en contraposición al énfasis exclusivo en la competitividad, propuesto en los períodos iniciales del consejo (CNIC 2006). Se trata de una iniciativa relevante para nosotros, por cuanto los laboratorios naturales se concibieron como un espacio de desarrollo no necesariamente orientado al sector económico, incluso refiriéndose específicamente a disciplinas como la astronomía y la arqueología (CNIC 2013). No obstante, y si bien algunos arqueólogos nacionales fueron incluso convocados ese año a discutir esta idea y desarrollarla, el CNIC perdió apoyo político y financiamiento, fue parcialmente remodelado por las autoridades centrales del país, y su énfasis volvió a girar hacia la innovación económica, por lo que la iniciativa no prosperó.

Los informes posteriores de este organismo documentan las pobres relaciones y vínculos que hoy en día posee la agenda de innovación con los aspectos de desarrollo social y cultural. De hecho, el año 2015 el CNIC materializaría definitivamente este giro pasando a llamarse Consejo Nacional para Innovación del Desarrollo. En este contexto, en la actualidad predomina la idea de que el desarrollo científico financiado por el Estado debe otorgarse a la ciencia “aplicada” y funcional al mercado, mientras que el impacto del desarrollo científico a nivel social y cultural se reconoce como aún “no visibilizado” en los sistemas de evaluación del organismo (CNIC 2014).

A partir de lo anterior, podemos afirmar que, en el discurso oficial, el financiamiento de la ciencia se justifica en términos de su aporte al desarrollo económico, social y cultural de Chile, pero que, de estos tres ámbitos, el único que ha sido discutido en mayor profundidad y el que, por lo tanto, ha primado, ha sido el ámbito del desarrollo económico. Esto no es de extrañar si consideramos que para el modelo desarrollista del que Chile forma parte, todas las esferas sociales se desarrollan por medio del avance económico (Alimonda 2011). Más aun, considerando que la innovación y el desarrollo económico son también los ejes de las políticas científicas nacionales de otros países latinoamericanos, incluso aquellos que forman el “Bloque Atlántico” de la UNASUR (Mercado et al. 2015), demostrando de este modo la influencia de los lineamientos de la OCDE y del modelo neoliberal, a pesar de la diversidad de orientaciones políticas de los gobiernos nacionales. En el año 2012, cuando el financiamiento de FONDECYT alcanzaba un *peak* histórico, la entonces Directora del programa señalaba que “nuestro país sabe que los avances científicos y tecnológicos son uno de los ingredientes clave para el desarrollo de Chile. FONDECYT es el principal fondo de financiamiento para la investigación individual” (Boissier 2012). Esta es una afirmación que, como ya argumentamos, es posible de encontrar en la mayoría de los investigadores que participan de la política científica chilena, así como en algunos políticos. No obstante, cabe preguntarse si existen otras alternativas para justificar el financiamiento público de la ciencia, y, en ese contexto, cuál es el rol de las ciencias sociales y la arqueología.

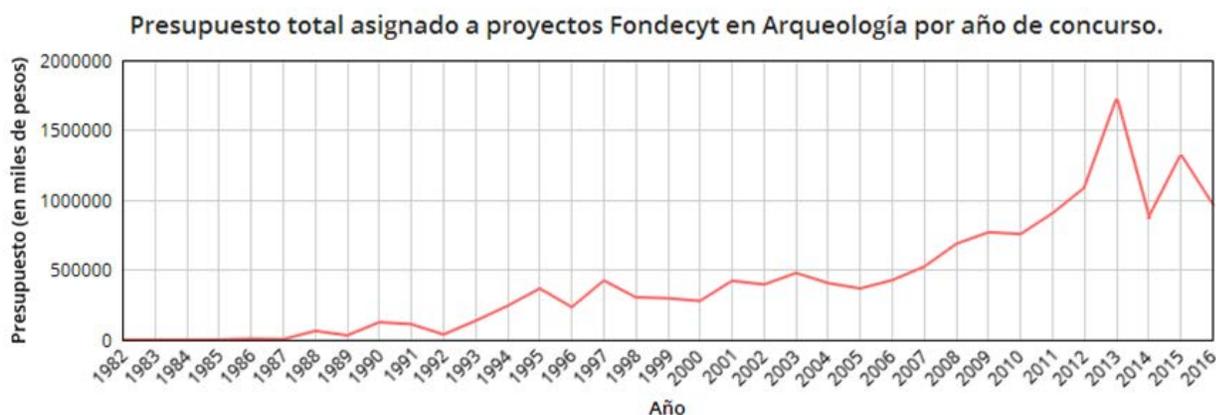


Pese a la carencia de definiciones precisas y discusiones de fondo acerca de los fundamentos de la política científica nacional y en particular en relación con la relevancia de las ciencias sociales, la creciente importancia que se le otorga a la ciencia en la “agenda para el desarrollo” de Chile se refleja en el aumento sostenido de su presupuesto. Ya indicamos el aumento de 300% que ha experimentado CONICYT en la última década. Como es de esperarse, la misma tendencia se refleja en el programa FONDECYT, cuyo presupuesto ha aumentado desde \$28.049.594.000 en 2007 a \$124.006.720.000 en 2016 (DIPRES 2007, 2016).

En términos de los objetivos de este trabajo, nos interesa destacar que la arqueología no ha estado exenta de este proceso, ya que también los fondos que recibe anualmente se han incrementado significativamente desde el inicio del programa en 1982 (Figura 3).

Figura 3. Presupuesto asignado a proyectos en arqueología entre 1982 y 2016

Figure 3. Budget assigned to archaeological projects between 1982 and 2016



La Figura 3 muestra que el año 2007 marca un quiebre al alza en términos de los montos asignados a proyectos de arqueología en FONDECYT, tendencia que se ve modificada drásticamente el año 2014, mostrando un comportamiento un tanto errático en los últimos dos años. El incremento en los fondos a partir de 2007 podría reflejar el efecto de la promoción realizada por el CNIC a la investigación científica dentro de la agenda para el desarrollo. En este mismo sentido, los datos de los últimos años son también interesantes puesto que coinciden con el desperfilamiento del CNIC y revelan la importancia relativa que le asignan los distintos gobiernos a la investigación científica, sobre todo en tiempos en que el mundo político y empresarial habla de desaceleración económica (Seymour 2016).

En síntesis, en Chile existe una concepción de la ciencia como una actividad productiva estrechamente relacionada con el progreso económico (CNIC 2010). Más adelante discutiremos si realmente el objetivo de la ciencia debe ser aportar al desarrollo económico. Por ahora reconozcamos que aún dentro de este paradigma, la relación entre ciencia y desarrollo económico opera en FONDECYT más a nivel de discurso que de realidad, puesto que el programa carece de una política explícita que fomente dicha relación en la práctica. Como consecuencia de lo anterior, se advierte una falta de correspondencia clara entre el discurso oficial respecto del objetivo del financiamiento público de la ciencia y los parámetros utilizados por el propio programa FONDECYT para adjudicar proyectos o para la evaluación curricular de los investigadores. Estos parámetros siguen básicamente los lineamientos establecidos por la academia del primero mundo, enfatizando indicadores cuantitativos bibliométricos y de *rankings* universitarios (Vessuri



2013), pero no es muy claro en qué medida estos favorecen a aquellos proyectos que más aportan al “desarrollo” de Chile. Tal situación se advierte en otros países latinoamericanos donde también existe “una incongruencia entre el elemento dominante del discurso de las Políticas de Ciencia y Tecnología -la prevalencia de lo económico- con las directrices de estímulo a actividades de investigación y desarrollo tecnológico, escasamente relacionadas con las realidades productivas de los países” (Mercado et al 2015: 330).

Quizás donde podría encontrarse una relación entre la política científica chilena y los parámetros de evaluación empleados por FONDECYT sería en el énfasis *aplicado* de la investigación (puesto que solo la investigación aplicada es capaz de producir bienes o innovaciones en los medios de producción). Pero en ese caso el apoyo de Fondecyt a disciplinas como la arqueología o la filosofía, entre otras, es difícil de entender. Con todo, en el caso de la arqueología este énfasis parece condicionar el hecho de que solo 4 (1,77%), del total de 226 proyectos arqueológicos aprobados entre 1982 y 2016, remitan a temáticas que analíticamente agrupamos en teórico/metodológico, mientras que el resto corresponde a la categoría de “ciencia aplicada”, que en este caso significa que se trata de investigaciones que deben constituir un aporte real al conocimiento a partir de modelos investigativos de carácter hipotético-deductivo, no aceptándose trabajos de índole taxonómico o recopilatorio (CONICYT 2000). Esta política evidentemente incentiva la búsqueda de problemas disciplinarios específicos, independiente del potencial o relevancia social que estos problemas de investigación puedan tener.

Como FONDECYT incentiva la generación de conocimiento “puro” y original, para mantenerse en el sistema y acceder a fondos de investigación un/a investigador/a debe preocuparse de generar publicaciones *Web of Science* o equivalentes y de formular proyectos que no impliquen una dedicación significativa de su tiempo a la puesta en valor, la difusión o el rol social del conocimiento. El resultado de lo anterior es una creciente especialización de la investigación y las publicaciones arqueológicas, tal como lo planteó Carrasco en el año 2006 al observar una creciente dicotomía entre la arqueología de investigación y la arqueología de impacto ambiental.

En realidad, el problema identificado por Carrasco nos parece aún más profundo, puesto que esta tendencia se manifiesta también entre la arqueología de investigación y la sociedad en general. En este escenario, las políticas de FONDECYT, esta vez de modo más implícito que explícito, promueven en la práctica la hiperespecialización científica. Si bien en los últimos años los proyectos FONDECYT han incluido un punto referido a la “difusión a público general”, el hecho de que la relevancia, metodología o relación de dichas actividades con el contenido del proyecto no sea considerada ni evaluada, refleja que no se trata de una política realmente comprometida con el rol social del conocimiento. Por su parte, recientemente las y los propios arqueólogos han reaccionado ante esta tendencia hacia la hiperespecialización tratando de fomentar la difusión y aporte social de sus conocimientos. Existen numerosas iniciativas al respecto en Chile y el mundo, denominadas genéricamente como “arqueología pública”. Sin embargo, en estos casos no siempre es claro el objetivo social que persiguen los proyectos de difusión del conocimiento arqueológico y, por lo tanto, queda sin discusión explícita cuál es el sentido de las ciencias sociales y de la arqueología más allá del desarrollo o, como en el caso de la arqueología pública, de la educación patrimonial.

Por otro lado, además de la hiperespecialización, el énfasis en la productividad académica medida en artículos en revistas indexadas tiende a favorecer la publicación de los resultados de nuestras investigaciones en el extranjero, y en particular en revistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. En



ocasiones esto promueve situar nuestras problemáticas de estudio en contextos de relevancia global, lo que pese a tener ciertos efectos positivos, atenta contra una detallada discusión de los datos y de los procesos históricos locales.

Para acceder a publicar en revistas internacionales indexadas, y por lo tanto acumular el suficiente capital para seguir ganando proyectos y obteniendo fondos de investigación, la arqueología nacional se ve forzada a insertar los datos locales en discusiones teóricas generadas preferentemente en el mundo anglosajón o europeo occidental, fomentando de este modo nuestra dependencia cultural, tal como fue reconocido hace varias décadas por la arqueología social latinoamericana (Lorenzo *et al.* 1976) y más recientemente por la arqueología poscolonial sudamericana (Verdesio 2014; Gnecco 2008, entre otros). En este sentido, es posible que la situación de dependencia cultural de la arqueología chilena se haya profundizado en los últimos años como consecuencia de las políticas de FONDECYT en relación con la indexación como criterio de evaluación de la productividad. Después de todo, debemos reconocer que los “parámetros de excelencia” empleados por bases de datos como Web of Science o Scopus se asumen como universales y neutrales, pero en realidad son definidos por los países dominantes de la OCDE, y a partir de ellos se definen comunidades cerradas de académicos con importantes diferencias de capital simbólico, en especial entre el Norte y el Sur Globales (Vessuri *et al.* 2014). Por lo tanto, el resultado de esta política de indexación es que los conocimientos que generamos en ciencias sociales rara vez generan impacto social local, pues por una parte se desincentiva su socialización y su aplicación real, y por la otra los resultados de las mejores investigaciones se publican en inglés, en revistas extranjeras contra las cuales las revistas locales no tienen posibilidad de competir.

Para completar y complicar este panorama, no está demás reconocer que las revistas inglesas y norteamericanas en las que crecientemente están publicando lo/as arqueólogo/as chileno/as, son en su mayoría controladas por grandes casas editoriales guiadas por criterios de lucro y con una creciente tendencia hacia prácticas monopólicas, en la medida de que pocas empresas controlan la vasta mayoría de las revistas científicas (Delgado-López y Repiso-Caballero 2013). De acuerdo con el reciente estudio de Larivière y colaboradores (2015), cinco de las empresas editoriales más importantes del mundo (Reed-Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer, Taylor & Francis y Sage Publications) pasaron de publicar el 15% de los artículos en ciencias sociales en 1996, a publicar el 66% de todos los artículos científicos en estos ámbitos en el año 2013, logrando actualmente márgenes de utilidad y lucro cercanos al 30% anuales. E incluso las mismas bases de datos que definen los parámetros de excelencia académica son también controladas por empresas privadas. Tal es el caso, por ejemplo, de Clarivate que controla Web of Science y de Elsevier que controla Scopus (Vessuri *et al.* 2014).

Esto demuestra que la adopción de criterios estandarizados para evaluar la productividad científica tiene sin duda aspectos positivos en la medida de que garantiza que las revistas indexadas cumplen ciertos estándares de calidad, pero genera a su vez implicancias políticas como las que hemos descrito, las cuales no son asumidas o discutidas en profundidad por las comunidades científicas nacionales o los grupos de estudio de FONDECYT. De ahí la relevancia de poner en duda este sistema de evaluación de la productividad científica, tal como proponen Gallardo y Cabello en el caso de la arqueología chilena (SCHA 2015). Cabe preguntarse, por ejemplo, cuál es el nivel de injerencia que tienen las grandes casas editoriales, con sus criterios comerciales, en la definición de las agendas temáticas más recurrentes dentro de las disciplinas o en el enfoque de las investigaciones individuales que buscan adecuarse a los perfiles editoriales de las revistas. Dilucidar estos aspectos requiere de investigaciones empíricas futuras.



En este mismo sentido, si bien el grupo de estudios de antropología y arqueología de FONDECYT aún no considera el índice de impacto de las revistas como criterio de evaluación curricular, su eventual aplicación implicaría fomentar ciertas temáticas específicas, por ejemplo aquellas vinculadas con el paleoambiente, la geoarqueología o la arqueometría, ya que ellas tienen cabida en revistas de otras disciplinas que tienen mayores índices de impacto en relación con la arqueología y la antropología.

Pero, debemos preguntarnos: ¿cuál es la importancia relativa que tienen los proyectos vinculados con estas temáticas respecto de otros? ¿Por qué es indispensable que los criterios de calidad de las revistas (indexación) sean definidos por empresas del primer mundo en base a una concepción de ciencia que ciertamente no considera su aporte a las realidades sociales latinoamericanas como un aspecto central? Llamamos la atención sobre estos puntos puesto que las políticas impuestas por FONDECYT a partir de los parámetros OCDE están perfilando a la arqueología y las ciencias sociales en direcciones que no hemos reflexionado si son realmente importantes o buenas siquiera para el país, aun cuando ciertamente favorecen nuestros intereses de investigación y la promoción de nuestras carreras académicas individuales.

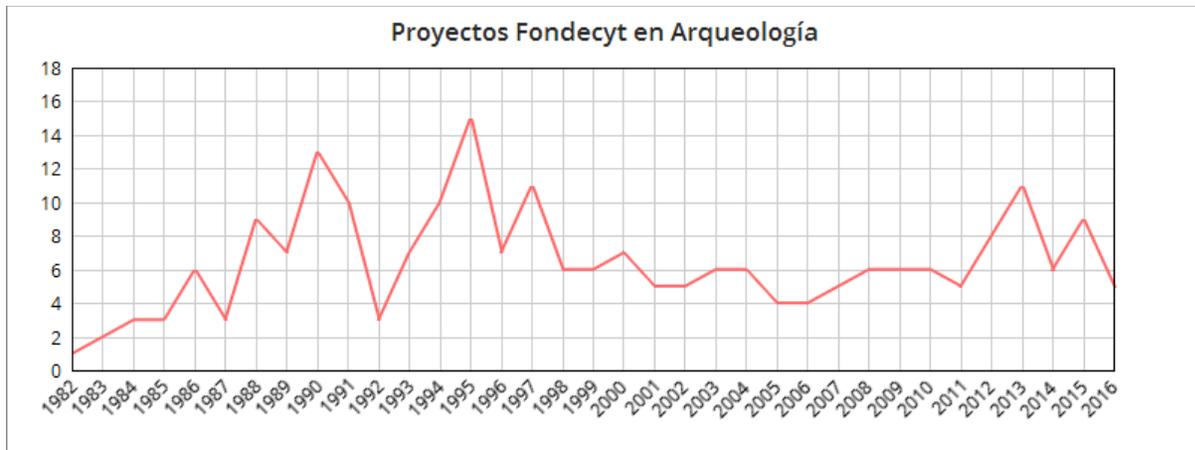
FONDECYT y la comunidad científica

Esta tercera dimensión política de FONDECYT trata sobre las relaciones sociales que se han ido constituyendo a partir de la investigación científica nacional financiada por este programa, siendo posiblemente el aspecto más difícil de abordar a partir de parámetros objetivables y siendo además particularmente complejo segregarse la dimensión política de las prácticas constituidas a partir de los proyectos FONDECYT, de las que promueven otras instituciones que articulan el desempeño de las y los arqueólogos en Chile. Por ello, lo que se requiere a futuro para profundizar en esta dimensión es el desarrollo de investigaciones de “sociología de la ciencia”, tales como el trabajo de Leighton (2014), posiblemente el único ejemplo sistemático en su tipo en Chile. En consecuencia, nos limitamos en esta sección a esbozar solo algunos aspectos de este complejo y multidimensional fenómeno.

El primer aspecto que conviene resaltar, el cual ya fue advertido por Gallardo y Cabello (SCHA 2015) en su reciente síntesis de las tendencias en la arqueología de investigación en Chile, es una concentración en la adjudicación de proyectos FONDECYT: la importancia que se le otorga al currículum de un investigador responsable (IR) en FONDECYT ha redundado en una especialización y progresiva estrechez del universo de quienes pueden adjudicarse proyectos, sobre todo considerando la cada vez mayor cantidad de arqueólogo/as que se titulan anualmente en Chile. Una mirada preliminar de los datos sugiere que una persona egresada de arqueología en Chile luego de aproximadamente cinco años en la universidad, no logra adjudicarse un proyecto FONDECYT como IR sino hasta un mínimo de 10 años después de su egreso. Consciente de esta situación, el programa FONDECYT ha disminuido levemente en los últimos años el porcentaje de la evaluación de un proyecto que recae en el CV del/la IR, y ha abierto los concursos de Posdoctorado e Iniciación, como una manera de potenciar investigaciones de profesionales jóvenes que les permita integrarse posteriormente al sistema. Esta última iniciativa recién está comenzando a tener un efecto en la arqueología, pues los dos nuevos concursos exigen un grado de doctorado en los últimos cinco años, siendo pocos aún los arqueólogos chilenos que han obtenido recientemente dicho grado académico.



Figura 4. Cantidad de Proyectos FONDECYT aprobados por año en el área de arqueología
Figure 4. Frequency of FONDECYT projects approved in archaeology



El análisis de la cantidad de proyectos FONDECYT regulares en arqueología adjudicados por año (Figura 4) refleja esta dificultad para obtener la aprobación de un proyecto FONDECYT, dado que, pese a que cada año egresan más personas de las carreras de arqueología, la cantidad de proyectos asignados se ha mantenido relativamente estable desde 1988 a la fecha.

Pese a esta relativa estabilidad, los datos muestran también fluctuaciones interesantes de profundizar. Por ejemplo, el aumento en la adjudicación de proyectos en arqueología a partir del año 2013, el cual sería resultado de la apertura de los concursos de posdoctorado e iniciación. Por otro lado, salvo por un descenso importante en el año 1992, entre 1982 y 1995 se observa una clara tendencia al alza en proyectos arqueológicos financiados por FONDECYT, años en los cuales se consolida este programa como la base del financiamiento de la investigación arqueológica en Chile. Podría decirse que en cierto modo la investigación científica en arqueología se consolida en este período gracias al financiamiento de FONDECYT. Sin embargo, a partir de esa fecha, y en especial entre el año 2000 y 2012, la cantidad de proyectos adjudicados disminuye, aún a pesar de que dicho decenio coincide con el aumento exponencial de los Licenciados en Arqueología de la Universidad de Chile y con la aparición de nuevas carreras de arqueología en las Universidades de Tarapacá, SEK y Bolivariana. Es decir, pese al aumento de profesionales, disminuye la cantidad de proyectos FONDECYT adjudicados. Naturalmente la explicación a este fenómeno debe considerar el efecto que ha tenido la arqueología de impacto ambiental sobre el campo laboral de la disciplina en Chile a partir de la promulgación de la Ley General de Bases del Medioambiente en el año 1994 y su entrada en vigencia en 1997.

Esta circunstancia es importante de ser resaltada, y es parte de lo que Carrasco (2006) denominó una “creciente dicotomía entre Arqueología Científica o Académica y Arqueología Profesional o Aplicada” (Carrasco 2006: 45), la cual ha tendido a fragmentar el “campo” de la arqueología chilena en dos. En efecto, tal dicotomía tiende a replicarse en la diferenciación entre la Sociedad Chilena de Arqueología y el Colegio de Arqueólogos, la primera de ellas estrechamente vinculada con FONDECYT. Por ejemplo, un 81,4% de la totalidad de proyectos FONDECYT en arqueología han sido adjudicados por una o un Investigador Responsable socio de la SChA, en contraste con el 19,5% de adjudicaciones para



colegiadas/os en el CACH. Porcentajes no del todo confiables, en todo caso, pues al menos veinticinco colegas “militan” en ambas organizaciones.

Lo cierto es que dentro de la arqueología científica o académica, articulada casi exclusivamente por el financiamiento de FONDECYT desde 1982 e históricamente vinculada con la SChA, con las mayores tasas de productividad académica y con la activa participación en congresos nacionales e internacionales, se observa una creciente competencia entre los agentes, que en parte obedece a la necesidad de acumular capital científico en la forma de estudios de posgrado y, fundamentalmente, de publicaciones indexadas (*Web of Science* o equivalentes). El prestigio es un elemento fundamental en las prácticas académicas, tal como parece sugerirlo la creciente participación de lo/as arqueólogo/as nacionales en mecanismos de difusión científica como *Academia* o *ResearchGate*. Los intereses profesionales tras la búsqueda de dar a conocer el resultado de las investigaciones propias en audiencias extralocales y, de preferencia, ser citados por ellas, no pueden separarse de los intereses personales por acumular prestigio individual para posicionarse estratégicamente en las estructuras académicas que conforman el “campo” de la arqueología académica, asegurando de este modo la reproducción en un sistema cada vez más competitivo, dado el aumento de profesionales que conforman dicho campo (Bourdieu 2003).

Más aún, la productividad de un/a investigador/a y el tipo de revistas en las que publica son en la actualidad criterios implícitos de evaluación de la calidad de nuestro propio trabajo y el de nuestros colegas dentro del ámbito académico, generando diferencias en favor de quienes publican más y en revistas en inglés, independiente del tipo de problema de investigación abordado, o de la relevancia social del mismo. Estos criterios también generan diferenciaciones sutiles, pero reales, en la relación entre la arqueología académica y la de impacto ambiental -siendo la primera quien detenta mayor prestigio-, así como en la que establecen lo/as arqueólogo/as chilenas con sus colegas extranjero/as, en especial si estos provienen de Estados Unidos, Inglaterra o Francia, en cuyo caso la relación se invierte ya que son los colegas extranjeros quienes detentan el mayor prestigio. Este último punto es parte nuevamente de las relaciones de dependencia cultural de la arqueología chilena respecto de aquella que se produce en el primer mundo, en particular en el mundo anglosajón. Lo anterior, sin embargo, contrasta con la posición marcadamente nacionalista de la arqueología chilena, que explícitamente –y en ocasiones quizás de modo cuestionable desde el punto de vista de la convivencia y el respeto mutuo- ha resistido la presencia de investigadore/as extranjeros, particularmente norteamericanos, en nuestro país. Lo anterior es interesante de discutir puesto que, dentro del esquema científico actual, una postura realmente nacionalista quizás debiese fomentar la investigación de académico/as del primer mundo en Chile, exigiendo por ley que sus resultados sean también publicados en español y en revistas locales. De esta manera, estaríamos potenciando nuestras revistas con artículos de académico/as de mayor prestigio, y a la vez estaríamos fomentando que dicho/as académicos/as lean la producción local en español, lo que permitiría una mejor inserción posterior de nuestra literatura dentro de los círculos anglosajones.

Por supuesto que la discusión más de fondo es si realmente debemos o no organizar nuestra política científica en torno a los parámetros de la OCDE y de la academia del primer mundo (Vessuri *et al.* 2014). Mientras no generemos esta discusión, continuaremos reproduciendo la dependencia cultural y prácticas académicas coloniales. En efecto, lo anterior también puede verse en las mallas curriculares de las carreras de arqueología en Chile, que tienden a poner énfasis en el método hipotético deductivo de FONDECYT como la forma más válida de investigación y a considerar en forma casi exclusiva a corrientes anglosajonas en los cursos de “teoría arqueológica”.



Con todo, es interesante el comentario de Leighton (2014: 238) en el sentido de que arqueólogo/as chileno/as que critican el sistema Fondecyt por promover una arqueología desvinculada de su relevancia social local y que replica parámetros académicos norteamericanos, de esta forma reproduciendo la dependencia cultural (incluido el primer autor de este trabajo), son los mismos que forman parte del sistema, no solo beneficiándose de su financiamiento, sino también participando como evaluadores de pares y como miembros del grupo de estudio. Una posible explicación de esta aparente contradicción es el hecho de que el sistema de Fondecyt permite cierta flexibilidad de nuestras prácticas académicas de modo tal que, cumpliendo los parámetros exigidos por el sistema en términos de publicaciones, es posible darle también una orientación más social y de relevancia local a nuestras investigaciones. Independiente de lo anterior, lo que parece relevante de la observación de Leighton (2014), es que si bien las directrices del programa Fondecyt ciertamente ejercen una importante influencia en la promoción de un tipo de práctica académica, también es cierto que ésta ha sido internalizada en nuestras propias predisposiciones personales, de tal manera de que incluso dentro de los espacios de toma de decisiones que Fondecyt ofrece, nosotros como académico/as que participamos de ellos somos los propios responsables de la reproducción del sistema y de las mismas prácticas que criticamos.

Este es un punto que vale la pena resaltar, puesto que demuestra que la responsabilidad en la reproducción –y por lo tanto también en la transformación– de las prácticas académicas que caracterizan crecientemente a la arqueología chilena no recae exclusivamente en Fondecyt, sino que somos los propios agentes que formamos parte de la comunidad académica y que participamos tanto en Fondecyt como en las distintas instituciones que forman la arquitectura del campo científico de la arqueología chilena quienes las perpetuamos. En ese sentido, el propósito de este trabajo ha sido contribuir al desarrollo y discusión de posturas críticas respecto de la política científica chilena y el rol de la arqueología en ella, para a partir de estas generar posibles transformaciones en los espacios institucionales a nuestra disposición, tales como el propio programa Fondecyt, entre varios otros. Como señala Vessuri (2013: 220) “el Estado-nación sigue siendo crucial para hacer política [científica] y definir identidades. De esta forma, es un sitio clave de intervención”. De allí la necesidad de discutir propuestas que permitan repensar a la arqueología en el marco de Fondecyt en el futuro, de modo de avanzar hacia transformaciones institucionales que le permitan a la disciplina, y a las ciencias sociales en general, aportar de mejor manera a la sociedad nacional. En esta última sección del artículo presentamos algunas ideas que apuntan en esta dirección.

SÍNTESIS, PROPUESTAS Y CONCLUSIONES

La lectura de buena parte de las réplicas al trabajo de Mayol y Araya (2016), así como de sus defensores, dejan la sensación de que la discusión generada por dicho estudio se fue reduciendo finalmente a determinar si la política opera o no opera dentro del sistema Fondecyt. Dado que en este trabajo partimos del supuesto de que ciencia y política están estrechamente vinculadas, determinar si la política opera o no en Fondecyt nos parece una discusión innecesaria. Por el contrario, nos parece que la pregunta realmente relevante es acerca de *cómo* específicamente opera la dimensión política en Fondecyt, qué implicancias tiene en la actividad científica chilena y cómo podría operar dicha dimensión para que la disciplina cumpla un rol social.

Sin duda que la relación entre ciencia y política a través del programa Fondecyt es mucho más compleja y multidimensional de lo que hemos logrado esbozar en este trabajo, estando articulada a partir de diversas capas y en un conjunto amplio y diverso de prácticas y contextos sociales e institucionales. Pese a ello,



nos parece importante dar este primer paso en la reflexión por cuanto el ejercicio científico en Chile parece no haberse problematizado críticamente con profundidad, a pesar de las evidentes implicancias políticas con que éste se financia y lleva a cabo como política de estado.

En términos muy generales puede afirmarse que la forma de hacer arqueología en el marco de Fondecyt se constituye a partir de la importación de un modelo positivista hipotético deductivo desde el mundo anglosajón (Troncoso *et al.* 2008), la aplicación de un conjunto de estándares y regulaciones académicas que en gran medida recogen los parámetros de ciencia de la OCDE, incluyendo una concepción desarrollista de la ciencia (CNIC 2010), la cual sin embargo se mide y evalúa principalmente a partir de publicaciones académicas *rankeadas* a partir de los estándares propuestos por empresas internacionales. El resultado de esta mixtura de factores es una múltiple relación de colonialidad para la arqueología chilena, ya que la noción de qué es la ciencia y cuál es su sentido y utilidad emanan desde el modelo desarrollista, mientras que los parámetros para evaluar la productividad científica son determinados en general por el criterio de ciencia de la OCDE, los cuales privilegian a académico/as del primer mundo provenientes de instituciones prestigiosas. Es en el mundo anglosajón donde se editan las revistas donde crecientemente publica la comunidad nacional, y desde donde se importan los modelos interpretativos, muchas veces alimentados con datos empíricos locales. Los grupos locales no académicos, por su parte, quedan totalmente excluidos del sistema de investigación, aún en los casos en que dichas investigaciones se realicen dentro de sus propios territorios.

Los criterios de evaluación de productividad y el énfasis aplicado que exige Fondecyt dificultan en el caso de la arqueología tomar consciencia de estas situaciones y, por sobre todo, inhiben una mayor reflexión teórica acerca de una concepción chilena de *qué es*, qué implicancias tiene, y cuál debería ser el rol social de la arqueología en el marco de la realidad nacional. La necesidad de una mayor reflexión sobre estos temas se hace extensiva a las ciencias sociales en general, ya que el modelo desarrollista no parece útil ni deseable para nuestras disciplinas pues es concebido preponderantemente como un modelo económico (Mercado *et al.* 2015). En buenas cuentas, debemos retomar y profundizar el debate acerca de qué es la arqueología, y para qué sirve en un contexto nacional (Adán *et al.* 2001; Berenguer 1983; Cornejo 1993; Gallardo 1983; Jackson 2000; Jiménez *et al.* 2000; Massone 1987; Montané 1971; Salazar *et al.* 2012; Sepúlveda 2012; Uribe y Adán 2003, entre otros) y articularla con una reflexión acerca de las actuales políticas de estado acerca de la ciencia en Chile.

Nos atrevemos a plantear que dado el incremento significativo en el financiamiento de la investigación científica que ha promovido el Estado en las últimas décadas, las ciencias sociales en general, y la arqueología en particular, no se han visto en la necesidad o el apremio de justificar su quehacer, lo que nuevamente ha disuadido los espacios de reflexión. No en vano la arqueología chilena ha realizado mayores acercamientos a las dimensiones políticas de Fondecyt cuando se han anunciado recortes presupuestarios a la investigación o el paso de Conicyt al Ministerio de Economía. Pero quizás debamos darle más importancia a esta reflexión y no esperar a que se realicen recortes presupuestarios para salir a defender (¡o a pensar!) la relevancia social de la disciplina.

En este sentido, nos parece que Fondecyt existe como realidad concreta y consciente para la mayoría de las y los arqueólogos chilenos casi exclusivamente en su dimensión más académica. Esto significa que, fascinados por nuestras investigaciones y las de nuestros colegas, privilegiados por contar con financiamiento generoso para proseguir nuestras investigaciones y, quizás, un poco obnubilados por el capital científico que acumulamos y la reproducción en el campo académico que este capital nos provee,



el mundo de la investigación que permite Fondecyt se ha convertido en nuestro principal horizonte de reflexión y de responsabilidad. Pero lo cierto es que no podemos ser solamente investigadore/as, pues al participar del sistema también somos agentes de la reproducción del mismo, por lo tanto contribuyendo a legitimar determinadas estructuras sociales y condiciones políticas, tales como las que hemos esbozado en estas páginas. Asumir solo la dimensión académica de Fondecyt implica necesariamente aceptar tácitamente sus implicancias políticas. Y como hemos visto, estas incluyen la reproducción de diversas expresiones de colonialidad y desigualdad.

En este trabajo hemos intentado mostrar que Fondecyt es mucho más que dinero del Estado para financiar investigación científica y promover nuestras investigaciones y, de paso, nuestras carreras académicas. Existen diversos ámbitos de relevancia política que operan permanentemente en la reproducción del programa y de los que tenemos que hacernos cargo.

Como ya señalamos, para ello es central promover una reflexión colectiva acerca de la disciplina. En concreto, para sacudirnos de la concepción de la ciencia al servicio del desarrollo económico neoliberal, debemos tener claridad respecto de cuál es el sentido de la investigación arqueológica, es decir, el por qué debe hacerse investigación arqueológica en Chile y por qué debe ser ésta financiada por el Estado a través de programas como Fondecyt. A partir de esta reflexión debemos evaluar la necesidad de reformular la estructura administrativa y las políticas de Fondecyt de modo de garantizar que las investigaciones arqueológicas –y las ciencias sociales en general– cumplan con dicho objetivo o sentido.

Si bien la discusión de este punto amerita un trabajo en sí mismo, nos parece que un aspecto que no puede estar ausente es la responsabilidad de nuestras disciplinas de contribuir a la comprensión densa de los fenómenos sociales contemporáneos, de modo de contribuir a la reflexión crítica no solo de las autoridades (y de este modo alimentar la formulación de políticas públicas que promuevan la justicia social y la equidad), sino también de la ciudadanía común y corriente, respecto de sus propios contextos sociales y los procesos históricos en los que están insertos. La arqueología, en este sentido, no solo tiene la responsabilidad de aportar con una perspectiva histórica de larga duración para la comprensión de los fenómenos presentes, sino también de descentrar las pretensiones de universalidad de los modelos económicos, sociales, políticos y culturales propios de la Modernidad Europea, al contrastarlos con la vasta, rica y diversa experiencia humana en el presente y en el pasado.

Si consideramos estos como algunos de los propósitos centrales de las ciencias sociales y de la arqueología en particular, entonces quizás podamos pasar a pensar en la segunda pregunta que planteamos anteriormente. ¿Hasta qué punto el funcionamiento actual de Fondecyt promueve este sentido social de la disciplina, y qué aspectos pueden modificarse para garantizar que la producción científica arqueológica apunte en dicha dirección? Como una primera propuesta en relación con este tema, consideramos que el sistema actual de “libre competencia” entre los proyectos de investigación por acceder a financiamiento no discrimina ni jerarquiza la relevancia social de los proyectos de investigación ni el potencial aporte a la comprensión de fenómenos de relevancia en el presente. Por ello sostenemos que podría discutirse la posibilidad de que al menos parte de los fondos de los que dispone Fondecyt para financiar las Ciencias Sociales se destinen para financiar proyectos que tengan que ver directamente con temas de relevancia para el país y la sociedad actual, privilegiando los proyectos vinculados con comunidades subalternas. Cuando menos, se le debiera exigir a todos los proyectos de investigación arqueológica que declaren explícitamente cuál es el aporte social que generará y cómo se buscará el logro de dichos aportes. Por supuesto que una propuesta como ésta necesariamente implica discutir cómo y quién selecciona los



“temas relevantes” que serían priorizados, o quien define y evalúa “el aporte social de un proyecto”. Más que dejar estas decisiones en manos de evaluadores externos, una posibilidad es que el propio grupo de estudio de antropología y arqueología tenga una discusión más política y defina los “temas-país” que van a ser priorizados en cada concurso y evalúe el rol social propuesto por los diversos proyectos en competencia. Estamos conscientes que esta no es la única posibilidad y que, de hecho, este es un punto complejo que requiere un debate más a fondo, pero nos lleva a reflexionar acerca de los mecanismos de selección de los integrantes de los Grupos de Estudio de Fondecyt, dado que consideramos que estos deben tener un rol más protagónico en la reflexión política de la práctica académica financiada por Fondecyt. El sistema actual de designación de lo/as integrantes del grupo de estudio no es negativo, pero ciertamente se presta para malos juicios e interpretaciones, pues no es del todo transparente. Quizás debiéramos promover un sistema más democrático de elección de los miembros del grupo de estudio, obviamente considerando los antecedentes académicos de lo/as “postulantes” y garantizando una equilibrada representación de representantes de la Región Metropolitana y las regiones, así como de ambos sexos, de modo de intentar mitigar los efectos de la política nacional en el funcionamiento y asignación de recursos de Fondecyt. Algo similar debiera operar en lo/as evaluadore/as seleccionados, quienes debieran garantizar diversidad de instituciones y paridad de género, así como la representación del mundo no académico, tema sobre el que volveremos más adelante.

Independiente de estas consideraciones, como ya señalamos todos los proyectos que concursan en Fondecyt debieran abordar la relevancia social de la investigación. Hace pocos años Fondecyt incluyó en sus formularios de concurso un acápite destinado a la vinculación del proyecto con la sociedad por medio de la difusión, pero este ítem no es obligatorio y, sobre todo, no cumple ningún rol en la evaluación de los proyectos. Creemos que esto debe modificarse, de modo de que el grupo de estudio otorgue un puntaje para la calificación de los proyectos en términos de su potencial impacto social, de la coherencia entre este potencial impacto y la metodología planteada para alcanzarlo, y entre la pregunta de investigación científica y el potencial social explicitado. Lo anterior debiera ir acompañado de una valoración de las instancias de participación social y política de los resultados de las investigaciones, valoración que debiera ser complementaria a los antecedentes netamente académicos de lo/as postulantes, en cierta medida como lo proponen Gallardo y Cabello recientemente (SCHA 2015). Estos estándares no debieran exigirse solo al concursar los proyectos, sino que debieran evaluarse también al finalizar los proyectos, con una importancia equivalente a la de la productividad científica y el cumplimiento de los aspectos financieros, como criterios para establecer las posibilidades que tiene un académico/a de seguir concursando en el sistema Fondecyt. De este modo estaremos jerarquizando proyectos desde una perspectiva “política”, en el sentido de priorizar aquellos que realmente contribuyen a una mejor comprensión de los procesos sociales actuales de las distintas comunidades y actores sociales, y aquellos que promueven valores como la igualdad o la justicia social.

La “politización” de Fondecyt que proponemos no la consideramos algo negativo o peyorativo, como podría verse desde una perspectiva epistemológica que un tanto ingenuamente ve a la ciencia como políticamente libre y neutral. Por el contrario, esta politización nos recuerda que nosotros como académicos somos quienes debemos tomar parte en la discusión sobre estas dimensiones políticas de Fondecyt, pensando la política científica y el funcionamiento del programa de modo de garantizar que éste opere de forma democrática, pero por sobre todo definiendo el propósito de la investigación arqueológica y discutiendo acerca de las prácticas y parámetros institucionales más adecuados para alcanzar dicho propósito.



Un aspecto relacionado con el anterior, y tal como ya adelantamos, es que debieran discutirse formas de participación de actores no académicos en los procesos de discusión y toma de decisiones. Esto parece especialmente importante en el caso de proyectos que propongan realizar estudios con personas o en territorios de comunidades indígenas. Pero nos parece que no es exclusivo para este tipo de proyectos. Postulamos que el sistema actual de consentimientos informados y de certificados de comités de ética de las instituciones patrocinantes no es suficiente para garantizar que las propias comunidades locales (indígenas o no) tengan el derecho de aprobar o rechazar proyectos de investigación que se vinculen con ellas y sus territorios. La participación de personas pertenecientes a comunidades indígenas o bien de otros actores sociales no académicos puede darse dentro de los propios grupos de estudio (lo cual permitiría su participación en la definición de los “temas-país” que debiera promover la investigación en ciencias sociales), o a lo menos a partir de la formación de comités específicos de Fondecyt que evalúen los proyectos para garantizar el cumplimiento de estándares ético-políticos. Lo cierto es que dicha participación es clave dentro de un proyecto de descolonización de la arqueología, ya que equilibra el eje del poder acerca de qué y cómo se investigan los fenómenos sociales en Chile, desplazándolo desde el control absoluto de los investigadores en un contexto de autonomía y libre competencia, hacia espacios de negociación y deliberación con las comunidades en cuyos territorios se realizan las investigaciones.

Algunos colegas argumentarán que propuestas como la nuestra introducen una dimensión excesivamente política en la adjudicación de proyectos y en la evaluación de sus resultados. Pero nuestra respuesta es que la dimensión política en la adjudicación y evaluación de los proyectos ya existe, solo que de manera no consciente (y por lo tanto la consecuencia es que, sin quererlo, estamos reproduciendo las condiciones sociales y políticas de la sociedad mayor en la que estamos insertos, con sus relaciones de exclusión y colonialidad). Por ejemplo, el hecho de que no haya personas no académicas en los comités de evaluación es, ciertamente, una decisión política y que tiene efectos no menores en las relaciones entre la comunidad científica y la sociedad en general, y en particular en la autoestima y los derechos de representación y autonomía de diversas comunidades locales, incluyendo por cierto las indígenas. Por ello, vale la pena recordar las palabras de McGuire con las que iniciamos este ensayo. Ya no se trata de intentar hacer de la práctica académica un espacio apolítico, puesto que esto no es posible y solo estaremos enmascarando o invisibilizando relaciones políticas de facto, entre ellas la relación colonial del mundo académico respecto del no-académico. El punto es más bien cómo consensuamos ciertos criterios y parámetros políticos que rijan nuestras prácticas académicas para garantizar que cumplan con su sentido social y con estándares éticos propios de una sociedad que es multicultural y en donde las y los académicos no son los únicos actores que tienen derecho a decidir qué, cómo, por qué y para qué se investiga.

Agradecimientos. Agradecemos a los editores de la Revista Chilena de Antropología por la posibilidad de publicar acá nuestras reflexiones, así como a los comentaristas que generosamente han accedido a participar de la discusión, realizando importantes aportes críticos. También agradecemos a los colegas Gloria Cabello y Andone Gurruchaga por facilitarnos información inédita sobre la Sociedad Chilena de Arqueología y por la sugerencia bibliográfica de Lavriere *et al.* (2015), respectivamente.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adán L., M. Uribe, M. Godoy, C. Jiménez y D. Salazar.** 2001. "Uso del patrimonio cultural en la construcción de memorias e identidades históricas nacionales". *Actas del IV Congreso Chileno de Antropología*, pp. 619-629. Colegio de Antropólogos de Chile. Santiago.
- Alimonda, H.** 2011. "La Colonialidad de la Naturaleza: una aproximación a la ecología política latinoamericana". En *La Naturaleza Colonizada: Ecología Política y Minería en América Latina*, editado por H. Alimonda, pp. 21-58. CICCUS Ediciones. Buenos Aires
- Angelo, D.** 2005. "La arqueología en Bolivia. Reflexiones sobre la disciplina a inicios del siglo XXI". *Arqueología Suramericana* 1(2): 185-211.
- Ayala, P.** 1999. "Cementerio de los Abuelos de Caspana: una forma de hacer Arqueología o un problema de ética en Arqueología". *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 27:28-32.
- Ayala, P.** 2003. "Arqueología y sociedad: el caso de las comunidades indígenas en Chile". *Werkén* 4: 59-73.
- Ayala, P.** 2007. "Relaciones entre atacameños, arqueólogos y Estado en Atacama (norte de Chile)". *Estudios Atacameños* 33: 133-157.
- Ayala, P.** 2014. "Patrimonialización y arqueología multicultural en San Pedro de Atacama (norte de Chile)". *Estudios Atacameños* 49: 69-94.
- Ayala, P.** 2015. "Neoliberal multiculturalism and contract archaeology in Northern Chile". *International Journal of Historical Archaeology* 19(4): 775-790.
- Berenguer, J.** 1983. "Redefiniendo la Arqueología". *Arqueología y Ciencia. Primeras Jornadas*, pp. 103-126. Museo Nacional de Historia Natural. Santiago
- Berenguer, J.** 1992. "Conclusiones y recomendaciones de la Comisión Prioridades de la Investigación". *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 14: 12-13.
- Berenguer, J.** 1995. "Editorial". *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 20: 1-2.
- Boissier, M. E.** 2012. La importancia de la norma ISO 9001:2008 para FONDECYT.
<http://www.conicyt.cl/fondecyt/2012/08/16/fondecyt-certifica-sus-procesos-con-la-norma-iso-90012008/>
- Bourdieu, P.** 2003. *Los Usos Sociales de la Ciencia*. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires.
- Cáceres, I.** 1992. "Arqueología, Antropología y Derechos Humanos". *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 15: 15-18.



Casals, M., L. Placencia y M. Salgado. 2016. Alberto Mayol, la ciencia y su genuina derechización. *Red Seca*. <http://www.redseca.cl/?p=6157>

Carrasco, C. 2006. "La práctica arqueológica y la actual construcción de conocimiento Arqueológico en Chile". *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 39: 35-50.

Carrión, H., C. Dávila, A. Delgado, N. Fuenzalida, P. Kelly, F. Moya, S. Rebolledo, S. Sierralta, J. Sepúlveda y C. González. 2015. "Evaluación de la arqueología social en Chile: desarrollo histórico y revisión crítica del proyecto disciplinar". *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 45: 95-114.

Ciencia Con Contrato 2015. Declaración pública de Ciencia Con Contrato sobre el estado actual de la investigación científica en Chile. <http://www.cienciaconcontrato.org/>

Clarke, D. 1973. "Archaeology: the loss of innocence". *American Antiquity* 47: 6-18.

Colegio de arqueólogos de Chile. 2015. Colegiados. <http://colegiodearqueologos.cl/colegiados/>

CNIC. 2006. Informe final del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad. http://www.cepal.org/iyd/noticias/pais/3/31473/Chile_Doc_1.pdf

CNIC. 2010. Agenda de Innovación y Competitividad 2020. <http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2015/04/Agenda-Innovaci%C3%B3n-2010-20201.pdf>

CNIC. 2013. Orientaciones estratégicas para la innovación: Surfeando Hacia el Futuro. Chile en el Horizonte 2015. http://www.senado.cl/prontus_senado/site/artic/20130812/asocfile/20130812163142/orientaciones_e_strategicas_para_la_innovacion.pdf

CNIC. 2014. Informe de actividades. <http://cnic.economia.cl/index.php/informe-actividades-2014-consejo-innovacion.html>

CONICYT. 2000. Programa Fondecyt. Impacto y Desarrollo. 1981-2000. 20 años. <http://dspace2.conicyt.cl/handle/10533/93930>

CONICYT. 2010. Memoria de Gestión 2006-2009. <http://www.conicyt.cl/pia/files/2012/08/MemoriaCONICYT20062009.pdf>

CONICYT. 2013. Brochure Institucional 2013. http://www.conicyt.cl/wp-content/uploads/2012/07/Conicyt_Brochure_2013_sp.pdf.

CONICYT. 2014. Análisis de evolución de proyectos adjudicados del Programa Fondecyt en el período 2000-2014. <http://www.conicyt.cl/wp-content/uploads/2014/07/An%C3%A1lisis-Programa-Fondecyt-2000-2014.pdf>

CONICYT. 2015. Participación Femenina en Programas de CONICYT. 2001-2015. Departamento de Estudios y Gestión Estratégica, CONICYT, Ms.



CONICYT. 2016. Presidenta de la República anunció la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. <http://www.conicyt.cl/blog/2016/01/presidenta-de-la-republica-anuncia-la-creacion-del-ministerio-de-ciencia-y-tecnologia/>

Cornejo, L. 1993. "Arqueología, museos y sociedad: un espacio para las utopías". *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 17:21-23.

Cornejo, L. 2000. "Editorial". *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 29:1.

Delgado-López, E. y R. Repiso-Caballero. 2013. "El impacto de las revistas de comunicación: comparando Google Scholar Metrics, Web of Science y Scopus". *Comunicar* 41(XXI): 45-52.

Dilla, H. 2016. Pensando más allá de Fondecyt (A propósito de "¿Tienen los concursos de Fondecyt un trasfondo político?" de Mayol y Araya). *El Desconcierto*. <http://www.eldesconcierto.cl/debates-y-combates/2016/03/27/pensando-mas-alla-del-fondecyt-a-proposito-de-tienen-los-concursos-de-fondecyt-un-trasfondo-politico-de-mayol-y-araya/>

DIPRES. 2007. Ley de presupuestos año 2007. Ministerio de Educación, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. http://www.dipres.gob.cl/595/articles-24080_doc_pdf.pdf

DIPRES. 2016. Ley de presupuestos año 2016. Ministerio de Educación, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. http://www.dipres.gob.cl/595/articles-126629_doc_pdf.pdf

Espinoza, C. 2015. Gobierno anuncia comisión para crear futuro ministerio de ciencia. *La Tercera*. <http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/01/659-614358-9-gobierno-anuncia-comision-para-crear-futuro-ministerio-de-ciencia.shtml>

Fajardo, M. 2016. Mario Hamuy, nuevo presidente del Conicyt, enfrentará una dura tarea en un sector en crisis. *El Mostrador*. <http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/03/22/mario-hamuy-nuevo-presidente-del-conicyt-enfrentara-una-dura-tarea-en-un-sector-en-crisis/>

Gallardo, F. 1983. "La arqueología ¿una ciencia social?". *Arqueología y Ciencia: Primeras Jornadas*, pp. 90-102. Museo Nacional de Historia Natural. Santiago

Gallardo, F. 1992. "Atrás ¡sin golpes!: ¿La arqueología es criticable o discutible?". *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 14:19-21.

Gero, J. 1985. "Socio-politics and the woman-at-home ideology". *American Antiquity* 50: 342-350.

Gnecco, C. 1995. "Praxis científica en la periferia: notas para una historia social de la arqueología colombiana". *Revista Española de Antropología Americana* 25: 9-22.

Gnecco, C. 2008. "Manifiesto moralista por una arqueología reaccionaria". En *Puentes hacia el Pasado: Reflexiones Teóricas en Arqueología*, editado por D. Jackson, D. Salazar y A. Troncoso. Serie Monográfica de la Sociedad Chilena de Arqueología 1, Santiago.



Hamilakis, Y. 2007. "From ethics to politics". En *Archaeology and Capitalism: from Ethics to Politics*, editado por Y. Hamilakis y P. Duke, pp. 15-40. LeftCoast Press.

Jackson, D. 1999. "Editorial". *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 27:1.

Jackson, D. 2000. "Editorial". *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 30:1.

Jiménez, C., D. Salazar y P. Corrales. 2000. "De los alcances de la arqueología: redefiniendo fronteras". *Conserva* 4: 71-86.

Jofré, D. 2007. "Reconstructing the politics of identity in Chile". *Archaeologies* 3(1): 16-38.

Larivière, V., S. Haustein y P. Mongeon. 2015. The oligopoly of academic publishers in the digital era. *PLoS ONE* 10(6): 1-15.

Leighton, M. 2014. *Uneven fields: transnational expertise and the practice of Andean archaeology*. Tesis Doctoral, University of Chicago.

Lorenzo, J.L. 1976. *Hacia una Arqueología Social. Reunión de Teotihuacán*. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

Lozny, L. (ed.) 2011. *Comparative Archaeologies: A Sociological View of the Science of the Past*. Springer, Nueva York.

Lumbreras, L. G. 1981. *La Arqueología Como Ciencia Social*. Hístar, Lima.

Maillet, A. 2016. ¿Politización de Fondecyt? Un poco de seriedad por favor. *El Mostrador*.
<http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/03/18/politizacion-de-fondecyt-un-poco-de-seriedad-por-favor/>

Más Ciencia Para Chile. 2012a. Comunicado "Más Ciencia": Sobre eventual traspaso de Conicyt al Ministerio de Economía. <http://www.mascienciaparachile.cl/?p=3545>

Más Ciencia Para Chile. 2016. Quiénes somos. http://www.mascienciaparachile.cl/?page_id=185

Massone, M. 1987. "Construyendo la arqueología chilena. Reflexiones". *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 7:2-5.

Mayol, A y J. Araya. 2016. *¿Tienen los Concursos de Fondecyt un Trasfondo Político?. Análisis Institucional de los Resultados del Concurso Fondecyt Regular desde los Clivajes Universitarios*. Centro de Investigación Sociedad Economía y Cultura (CISEC), Universidad de Santiago.

McGuire, R. 2008. "Archaeology as political action". University of California Press, California.



- MedUchile.** 2007. Masiva concurrencia de científicos a protesta por cortes presupuestarios. <http://www.med.uchile.cl/2007/octubre/1495-masiva-concurrencia-de-cientificos-a-protesta-por-cortes-presupuestarios.html>
- Mena, F.** 1992. "Crítica arqueológica y gran público". *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 14: 17-18.
- Mercado, A., H. Vessuri y K. Córdova.** 2015. "La política científica y tecnológica en Latinoamérica. Convergencias y divergencias frente a apremiantes problemas socioambientales". En *Mirada Iberoamericana a las políticas de ciencia, tecnología e innovación*, editado por R. Casas y A. Mercado, pp. 297-338. CLACSO, Argentina.
- Ministerio de Educación Pública.** 1981. Decreto con Fuerza de Ley 33: Crea fondo nacional de desarrollo científico y tecnológico y fija normas de financiamiento de investigación científica y tecnológica. *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*. <https://www.leychile.cl/N?i=4172&f=1981-10-27&p=>
- Montané, J.** 1971. "Apuntes para un análisis de la arqueología chilena". *Rehue* 4: 29-43.
- Montané, J.** 1980. *Marxismo y Arqueología*. Ediciones de Cultura Popular, México.
- OCDE.** 2007. Evaluación y recomendaciones generales. En, Estudios de la OCDE sobre política de Innovación, Chile. <http://www.bib.ufro.cl/porta1v3/files/estudios-de-la-ocde-sobre-politicas-de-innovacion-chile.pdf>
- Opazo, T.** 2014. Piñera clausura III Congreso del Futuro y anuncia creación de un nuevo Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. *La Tercera*. <http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2014/01/659-560336-9-pinera-clausura-iii-congreso-del-futuro-y-anuncia-creacion-de-nuevo-ministerio.shtml>
- Orellana, M.** 1996. *Historia de la Arqueología en Chile*. Bravo y Allende Editores, Santiago.
- Parada, J. R.** 1999. *Variables Discriminantes en Fondecyt*. Estudios Sociales N°100, Segundo Trimestre. Santiago, Chile.
- Politis, G. y J. Pérez Gollán.** 2004. "Latin American Archaeology: between colonialism and globalization". En *A Companion to Social Archaeology*, editado por L. Meskell y R. Preucel, pp. 353-373. Blackwell Publishing, Gran Bretaña.
- Rivera, M.** 1999. "Arqueología chilena y minorías culturales". *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 27:26-27.
- Romero, A.** 2003. "Arqueología y pueblos indígenas en el extremo norte de Chile". *Chungara* 35(2): 337-346.
- Salazar, D y C. Jiménez.** 1999. "Epistemología y Arqueología: de la urgencia por perder la inocencia". *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 28: 31-36.



Salazar, D., A. Troncoso y D. Jackson. 2012. "Entre dos tierras: reflexiones sobre la arqueología chilena en el siglo XXI". En *Teoría Arqueológica en Chile: Reflexionando sobre nuestro Quehacer Disciplinario*, editado por P. Ayala y F. Vilches, pp. 41-71. Quilca Ediciones, Santiago.

SChA. 1995. "XXX Aniversario Sociedad Chilena de Arqueología. Jornadas de Reflexión 1963-1993". Sociedad Chilena de Arqueología, Santiago.

SChA. 2015. *El Congreso Internacional de Arqueología de San Pedro de Atacama y la Sociedad Chilena de Arqueología: 50 años, ayer y hoy*. Varios autores. Sociedad Chilena de Arqueología y QILLQA-Ediciones IAA, Universidad Católica del Norte. Serie Monográfica de la Sociedad Chilena de Arqueología, número 5, en colaboración con el Instituto de Arqueología y Antropología de la Universidad Católica del Norte, Chile.

Schiappacasse, V. 1986. "Una ilusión perdida". *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 5: 16.

Sepúlveda, J. 2012. "Entre la arqueología del otro y la historia. Horizontes políticos para el conocimiento arqueológico". En *Teoría Arqueológica en Chile: Reflexionando sobre nuestro Quehacer Disciplinario*, editado por P. Ayala y F. Vilches, pp. 72-88. Quilca Ediciones.

Segovia, M. 2016. Vaivenes políticos y Fondecyt: la derechización de las ciencias en Chile. *El Mostrador*. <http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/03/16/vaivenes-politicos-y-fondecyt-la-derechizacion-de-las-ciencias-en-chile/>

Seymour, F. 2016. Economistas advierten que en Chile la crisis financiera se usa para evitar reformas. *Radio Universidad de Chile*. <http://radio.uchile.cl/2016/02/19/economistas-advierten-que-expectativas-economicas-negativas-buscan-frenar-reformas/>

Troncoso, A., D. Salazar y D. Jackson. 2008. "Ciencia, estado y sociedad: retrospectiva crítica de la arqueología chilena". *Arqueología Suramericana* 4(2): 122-145

Ucko, P. (ed.). 1995. *Theory in Archaeology. A World Perspective*. Routledge, Londres.

Uribe, M. y L. Adán. 2003. "Arqueología, poblaciones originarias y patrimonio cultural en el Desierto de Atacama". *Chungara* 35(2): 295-304.

Valdés, C., M. Massone, R. Sánchez, C. Aldunate, F. Falabella, F. Mena. 1994. "Arqueología y educación: explorando nuevos horizontes". *Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología* 19: 19-22.

Verdesio, G. 2014. "El subalternismo en el marco de la teoría arqueológica: Hacia un posible diálogo entre matrices teóricas". En *Multivocalidad y activaciones patrimoniales en arqueología: Perspectivas desde Sudamérica*, editado por M.C. Rivolta, M. Montenegro y L. Menezes Ferreira, pp. 67-88. Eudeba, Buenos Aires.

Vessuri, H. 2013. "¿Quién es el científico social en el siglo XXI? Comentarios desde los contextos académicos y aplicados y desde la corriente principal y la periferia". *Sociológica* 28(79): 201-231.



Vessuri, H., J.C. Guédon y A.M. Cetto. 2014. "Excellence or quality? Impact of the current competition regime on science and scientific publishing in Latin America and its implications for development". *Current Sociology* 62(5): 647–665.

Vila, N. 2012. Traslado de Conicyt al Ministerio de Economía provoca rechazo del mundo científico nacional. *Radio Universidad de Chile*. <http://radio.uchile.cl/2012/09/11/conicyt-sera-traspasado-al-ministerio-de-economia-ante-el-rechazo-del-mundo-cientifico/>

Vilches, F., P. Ayala, C. Garrido y U. Cárdenas. 2015. "The contemporary past of San Pedro de Atacama, Northern Chile: public archaeology?". *Archaeologies* 11(3): 372-399.

Zamorano, E. 2012. Chile: Molestia en comunidad científica por traspaso de Conicyt al Ministerio de Economía. *FayerWayer*. <https://www.fayerwayer.com/2012/09/chile-molestia-en-comunidad-cientifica-por-traspaso-de-conicyt-al-ministerio-de-economia/>

Recibido: 7 Abr 2017

Revisado: 21 Abr 2017

Aceptado: 18 May 2017